

El campo como híbrido de racionalidad e irracionalidad: tres estudios de caso acerca de la modernización reciente del medio rural en argentina

Countryside as rationality and irrationality hybrid: three case studies about rural medium's recent modernization in Argentina

Sebastian Gomez Lende

Doctor en Geografía. Investigador Asistente de CONICET. CIG, FCH
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
gomezlen@fch.unicen.edu.ar

Artigo recebido para revisão em 16/08/2012 e aceito para publicação em 5/10/2012

RESUMEN

El espacio geográfico, al igual que la acción humana, se compartimenta según sus distintos niveles de racionalidad. Surge así la posibilidad de distinguir a los llamados espacios de la racionalidad - aquellos alcanzados por el poder de contagio de la lógica dominante- de las áreas irracionales - definidas por situaciones no razonables, divergentes del orden global-. El campo no contraviene esa ley general; obstando la singularidad propia de cada actividad, la racionalidad hegemónica presente en el medio rural atañe al imperio de la agricultura científica globalizada como paradigma por excelencia. En este trabajo se procura, pues, indagar acerca de la reciente racionalización del campo argentino: ello implica, en primer lugar, investigar sus características generales e identificar la función dominante en derredor de la cual aquél se articula y reproduce; y contempla, en segundo término, desarrollar tres análisis regionales de caso que, implicando el estudio empírico de los diversos episodios de desestructuración sufridos por algunas producciones marginales -algodón, caña de azúcar, limón, yerba-mate, silvicultura-, conciernen a usos del territorio aglutinados por su incapacidad de incorporar a la lógica hegemónica en su forma pura, pero al mismo tiempo heterogéneos, en virtud de las estrategias de adaptación y reorganización ensayadas ante los vectores externos que, perturbando su desarrollo, imponen una tensión entre cambio y permanencia.

Palavras-chave: espacio geográfico; racionalidad; irracionalidad

ABSTRACT

The geographic space, as the human action, is fragmented according to its different rationality levels, which turn possible to distinguish between called spaces of the rationality -those reached by the dominant logic's power of infection- and irrational areas -defined by non reasonable situations, divergent to the global order-. Countryside isn't avoid that general law; preventing the singularity of each activity, the rural medium's hegemonical rationality concerns to scientific and globalized agriculture's empire paradigm. In this paper it is offered, then, to investigate about the recent Argentinean countryside's rationalization: it implies, in the first place, to inquiry about their general characteristics and to identify the dominant function that articulates and reproduces it; and contemplate, in second term, develop three regional analysis of case that, involving the empiric study of the diverse crisis moments suffered by some marginal productions -cotton, sugar cane, lemon, mate-herb, forestry-, implies to territory uses agglutinated by their inability of incorporating to the hegemonical logical in it's pure form, but singular, heterogeneous at the same time, in function of the diverse adaptation and reorganization strategies rehearsed against the external vectors that, perturbing their development, impose a tension between change and permanency.

Keywords: geographic space; rationality; irrationality

1. INTRODUCCIÓN

Siempre entendiendo al campo como un híbrido de racionalidad e irracionalidad, en este trabajo se procura indagar acerca del reciente proceso de racionalización del medio rural en Argentina, distinguiendo entre los espacios devenidos sede de la lógica dominante y las áreas incapaces de subordinarse plenamente ante aquella. Necesario para la cumplimentación de tal objetivo, el soporte teórico correspondiente implicará la elucidación de los conceptos de espacio geográfico, medio técnico-científico-informacional, acontecer jerárquico, homólogo y complementario, y crono-expansión de la frontera agropecuaria. El desarrollo empírico de la investigación contempla dos instancias: por un lado, la descripción de los rasgos generales del campo argentino, así como también el estudio de sus cambios más recientes, signados tanto por la difusión de las diversas manifestaciones del paradigma de la agricultura globalizada y cientifizada - concentración de las tierras y la propiedad, penetración de capitales extra-agrarios, propagación de la siembra directa, imperio de la biotecnología y la genética, quimificación exacerbada, etc- cuanto por la estructuración y afianzamiento del cultivo de soja transgénica como función hegemónica por excelencia; por otro lado, los análisis de caso propiamente dichos, los cuales, involucrando el estudio de los distintos momentos de crisis y reestructuración de actividades emblemáticas de diversos cotidianos regionales del norte argentino -como el cultivo de algodón en Chaco, la producción de azúcar y limones en Tucumán, la agricultura forestal y de la yerba-mate en Misiones y el nordeste correntino-, permitirán observar la segmentación del campo argentino en áreas racionales e irracionales, así como también la fragmentación de lugares y usos del territorio según su desigual permeabilidad a los datos propios del período. Se presentarán, finalmente, las principales conclusiones a las que este trabajo ha arribado.

2. ESPACIO GEOGRÁFICO, PERÍODO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL Y MEDIO RURAL

Si lo real -entendido como unidad del fenómeno y de la esencia, de las apariencias y de los significados- es una totalidad (Kosic, 1967), el espacio geográfico forma un todo. Santos (1996a) define a ese espacio como una forma-contenido, un conjunto insoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones que, mediados por las normas, unen a la configuración territorial y la dinámica social, a formas, funciones, estructuras y procesos; de ahí las diferentes densidades técnicas, informacionales y normativas del espacio, dadas en función de la diversidad de grados nacionales y regionales-locales de artificio material, de vinculación con el exterior y de espesura de vectores regulatorios, respectivamente. Nunca completo, el espacio, pues, se renueva y perfecciona constantemente; objeto de lo que un filósofo como Sartre (1968) llama totalización, él se desprende de antiguas cristalizaciones y, paralelamente, adopta rasgos más acordes a las lógicas imperantes en cada época, volviéndose testigo y, al mismo tiempo, protagonista, de un movimiento de despedazamiento, re-significación y reunión.

Según Heidegger (1959), el espacio contiene tiempo comprimido, de ahí que aquél sea una acumulación de tiempos (Santos, 1996b). Son en tal sentido determinadas formas materiales y no materiales de vida las que, al permanecer mutuamente integradas con arreglo a las posibilidades que influyen sobre las variables técnicas y políticas que definen y singularizan a una época (Santos, 1992; Silveira, 2004), configuran un período histórico. Sustentado en el auge del sistema de poder neoliberal, y conforme el papel estratégico ganado por los satélites, las telecomunicaciones, la informática, la biotecnología, la genética, las finanzas y los servicios se vuelve más preponderante, el período actual (el medio técnico-científico-informacional) revela ciertas especificidades, entre las que sobresalen la aceleración de la circulación, la consolidación de la división del trabajo, la mayor especialización económica, y la creciente tensión entre localidad y globalidad (Santos,

1996b). La oposición entre Estado y mercado, lo interno y lo externo, y lo antiguo y lo nuevo (Santos, 1992), heredada de épocas pretéritas, asume ahora la forma de un contrapunto entre verticalidades -reglas egoístas y utilitarias, solidaridades organizacionales que, articulando a subespacios no necesariamente contiguos (más sí rígidos por una misma lógica económica que homogeneiza los aspectos técnicos y políticos de las producciones hegemónicas), operan exclusivamente al servicio del mercado, desestructurando a los lugares donde se instalan y fomentando el uso del territorio como recurso en beneficio de actores por lo general externos- y horizontalidades -solidaridades orgánicas, de base local, que, negando el orden global a partir de temporalidades diversas y valoraciones no hegemónicas del trabajo colectivo, forjan un tejido continuo y heterogéneo de modernidades y obsolescencias diferentes en cuanto a edad y funcionalidad- (ver Santos, 1996a; 1996b; 2000; Silveira, 1999; 2003a).

Otro rasgo endémico del período técnico-científico-informacional es el desplazamiento del eje de gravedad de la expansión del influjo de la técnica y, sobre todo, de la ciencia y la información, desde las ciudades hacia un medio rural que renueva sus formas y contenidos con cada vez mayor rapidez y plasticidad. Sabido es que el campo se configura, ciertamente, en reino de un acontecer homólogo, resultante de la tendencia a la especialización de los espacios (Santos, 1996a) de la agricultura y la ganadería, la cual se desenvuelve en un marco de contigüidad territorial y similitud funcional; esas áreas desempeñan una función homogénea en un espacio oportuno a las jerarquías mundiales de producción, la cual, en virtud de su eficacia, rentabilidad y competitividad, conforma una productividad espacial determinada, relativa a un producto o a una combinación de productos (Silveira, 1999). No obstante, las áreas así configuradas y reproducidas no son impermeables a un acontecer jerárquico que, definido a partir de episodios de racionalización emanados de una escala superior y determinados por informaciones externas e intereses distantes, procura hacer tabla rasa de la historia pretérita y las herencias espaciales (Santos, 1996a; Silveira, 1999), impulsando la sustitución de

ciertos cultivos y prácticas, y la redefinición de límites y funciones, a tal punto que, de un año a otro, una producción tradicional, históricamente arraigada, puede desaparecer sin dejar rastro, merced a las fluctuaciones de precios internacionales, la introducción de innovaciones biotecnológicas y genéticas, la acumulación financiera y la penetración del capital extranjero. Obrando como intermediario entre ambas instancias -por un lado, una vocación histórica regional (una función que permanece) y, por otro lado, un cambio o transformación espacial (Silveira, 1999)-, se desenvuelve un acontecer complementario, animado por las más o menos profusas vinculaciones desarrolladas entre la ciudad y el campo (Santos, 1996a).

Nunca antes, empero, la incidencia de los vectores del acontecer jerárquico había sido tan decisiva en el medio rural como ahora, a tal punto que se ha tornado lícito hablar de lo que Santos (2000) llama 'agricultura científica globalizada', gobernada por las mismas leyes que pesan sobre el resto de la economía: un mercado lejano -y hasta cierto punto abstracto-, una competencia 'invisible' y precios internacionales sobre los que no prospera ningún intento de control o regulación local. Surge así un mundo rural sin misterios, que exige prever cada gesto y resultado (Santos, 1996a), y donde la naturaleza, en virtud de los nuevos usos del territorio, es constantemente reinventada a partir de una crono-expansión de la frontera agropecuaria basada en la acumulación de técnicas e informaciones, la cientifización del trabajo agrícola, la redefinición de las relaciones entre superficie, calendario y productividad, y la aceptación de los tiempos externos de la modernización y la globalización (Silveira, 1999).

Nacidas de los experimentos de laboratorios farmacéuticos, fabricantes de agrotóxicos y firmas biotecnológicas, las simientes genéticamente modificadas constituyen la base y el ariete de esa crono-expansión de la frontera agropecuaria. Inocentes sólo en apariencia, esas semillas esconden dentro de sí un complejo y eficaz circuito de mecanismos de subordinación y dependencia -patentes biotecnológicas, normas de sanidad y calidad, y sistemas técnico-organizacionales (agroquímicos, maquinarias, regímenes de tenencia, modalidades de

explotación, asistencia financiera)-. Y como el campo se revela cada vez más apto para la proliferación de nuevos ‘paquetes tecnológicos’, las solidaridades organizacionales entabladas entre las empresas globales consiguen prosperar, tejiendo una intrincada interdependencia entre datos y factores que en principio podrían parecer inconexos, como la irrupción de capitales extra-agrarios, el auge de la ingeniería genética, la mayor especialización y extroversión de la producción, la creciente influencia de los bancos, la concentración de la propiedad y el vaciamiento demográfico. No obstante, toda vez que la llegada e implantación de las nuevas divisiones del trabajo no implica necesariamente la total y absoluta exclusión de sus predecesoras (Santos, 1996a), la tensión entre acontecer jerárquico y cotidiano homólogo, entre cambio y permanencia, entre verticalidades y horizontalidades, entre reestructuración e inercia, se vuelve omnipresente, fracturando al medio rural conforme a sus diversos niveles de racionalidad.

3. CAMBIOS RECIENTES EN EL CAMPO ARGENTINO: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN GENERAL

Incipiente, la globalización de la agricultura argentina reveló sus primeros atisbos durante la década de 1970, cuando pasó a nutrir la constelación de lo que Friedmann (1993) ha denominado ‘los nuevos países agropecuarios’. Operando para reestructurar los calendarios agrícolas, la incorporación del llamado ‘germoplasma mexicano’ forjó una solidaridad técnica y temporal entre las especies vegetales que permitió que la siembra de oleaginosas sucediera a la cosecha de trigo, coadyuvando al incremento de la producción (Silveira, 1999). No obstante, esa autora señala que, pese a ello, la implantación de un cultivo que luego se volvería hegemónico -la soja- era todavía incipiente, no configurando aún un cinturón agrícola propiamente dicho (Silveira, 2003b). La verdadera ruptura y metamorfosis en el devenir del sector rural se produjo recién en la década de 1990. A raíz de la entronización del sistema de poder neoliberal, regulaciones públicas como los precios mínimos y máximos y los cupos de siembra, cosecha y

comercialización fueron suprimidas; paralelamente, la colección de germoplasma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) fue enajenada, y numerosos entes burocráticos otrora destinados a regular el sector -entre ellos, la Junta Nacional de Granos y la Corporación Nacional de Productores de Carnes-, desmantelados. Otrora comandado por grupos empresariales familiares y ahora sometido como ningún otro sector a los vaivenes del mercado mundial, el campo argentino se convirtió en escenario de disputa internacional del mercado agroalimentario, incorporando a su vez un *know-how* homogéneo y globalizado (Silveira, 1999). Las agroindustrias, merced a la profundización de la integración vertical de la producción y a la difusión de la agricultura bajo contrato y del llamado ‘supermercadismo’, ganaron poder sobre el sector; la agricultura familiar comenzó a menguar hasta casi desaparecer, en tanto que factores externos -crisis sanitaria de la ganadería, escalada del precio internacional de la soja, aumento de la demanda mundial de proteínas vegetales- e internos -‘desregulación’, privatizaciones, reestructuración económica, cambios climáticos, etc- pusieron fin a las tradicionales prácticas de rotación entre siembra y pastoreo, liberando -vía la liquidación masiva de vientres- tierras fértiles aptas para el desenvolvimiento del llamado *boom* oleaginoso.

Sabido es que, por añadidura, el auge de la biotecnología y de la ingeniería genética afianzó y aceleró la globalización del campo argentino, permitiendo llevar al extremo la manipulación de las leyes de la naturaleza y así acentuar su doblegamiento ante la inflexible razón instrumental del comercio internacional. No es extraño que en tal sentido casi 800 Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM’s) hayan sido liberados entre 1991 y 2004 en laboratorios, invernáculos, bioterios, invernaderos, campos de ensayo y áreas productivas (CONABIA, 2006), y que, a raíz de ese fenómeno, Argentina se convirtiera en el segundo productor mundial de cultivos transgénicos, con más de 18 millones de hectáreas sembradas (ISAAA, 2007), de las cuales la mayor parte corresponde a variedades Bt -resistentes a ciertas plagas- y RR -tolerantes a determinados agroquímicos-. La introducción

de la soja Round up Ready (RR) -creada por la empresa norteamericana Monsanto y difundida por sus licenciatarias Asgrow y Nidera, primero mediante mecanismos como el contrabando transgénico y las plantaciones clandestinas, luego gracias a una controvertida aprobación gubernamental de la patente correspondiente-, se constituyó en el hito-clave de ese proceso, conquistando el 99% de la superficie ocupada por esa oleaginosa; se trata de una variedad dotada de resistencia al glifosato de amonio, un herbicida que, también elaborado y comercializado por Monsanto, aniquila a todo ser viviente, a excepción de la semiente preparada para tolerarlo. Suplantado por una regulación estrictamente química, el control cultural de malezas -antaño responsable por el 40% de los costos de producción- fue abandonado; paralelamente, el 'silo-bolsa' permitió a los productores especular con la conservación del grano post-cosecha, evitando su entrega inmediata al acopiador y fomentando su retención conforme a las oscilaciones de los precios de la Bolsa de Chicago.

Solidaridades organizacionales tejidas entre esas variables determinaron que la superficie sembrada con ese cultivo pasara de apenas 37.000 hectáreas en 1970 y 667.000 hectáreas en 1996 a 15.000.000 hectáreas en 2006, aumentando su área un 470% entre 1988 y 2002 (SAGPyA, 2007a). La soja RR, al representar el 54% del área implantada, la mitad de la producción granaria y el 24,4% de las exportaciones nacionales, convirtió al país en el tercer productor mundial, erigiéndolo en líder en cuanto a la comercialización de los aceites y harinas derivados, concentrada en manos de empresas hegemónicas como Cargill, Bunge & Born, Toepfer, Louis Dreyfus, ADM, Nidera, Vincentín y Grobocopatel. Sostenida y creciente, la demanda de países como China, India, Holanda, Irán, Pakistán, Bangladesh y Japón (Pierri, 2006) tornó masiva la adopción del nuevo paquete tecnológico en la pampa húmeda (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa) y en el norte del país (Santiago del Estero, Chaco, Salta, Catamarca, Formosa, Jujuy, Tucumán). Se asistirá, en tal sentido, a una verticalización del campo argentino, manifestada a partir tanto de la homogeneización espacial de sus formas y

funciones cuanto de la adopción de pautas globales de acción y comportamiento. Otorgándole a la soja la potestad de resolver mágicamente problemas económicos como la escasez de divisas, los desequilibrios de la balanza comercial, el déficit fiscal o el endeudamiento financiero, el Estado colabora con la reproducción y expansión de esa división territorial del trabajo, más disputa a los terratenientes la apropiación de la renta agraria resultante, imponiendo retenciones a las exportaciones -25% en 2003, 35% en 2008- que no coadyuvan apenas al sostenimiento de las cuentas fiscales, sino también al pago puntual de los intereses de la deuda externa. La soja se convirtió, de ese modo, en vector del acontecer jerárquico y en símbolo del nuevo modelo.

Necesarios para permitir el pleno desenvolvimiento de la nueva actividad o función hegemónica, la llamada 'agricultura de precisión' -basada en el uso de maquinaria dotada de los últimos atributos de la técnica (GPS, SIG, banderilleros satelitales, monitores de rendimiento cuantitativo y cualitativo, etc)- y, sobre todo, el paradigma de la siembra directa, conquistaron -al compás de la diseminación de la soja RR- gran parte del territorio argentino; de hecho, la superficie trabajada por la siembra directa pasó, entre 1991 y 2001, de 500.000 a casi 10.000.000 hectáreas (Domínguez y Sabatino, 2003), acaparando casi la mitad (46,7%) del área implantada (INDEC, 2005). Se afianza, pues, la lógica del monocultivo; entendida como un sistema de explotación que, en solidaridad con la supresión de las tareas de desmalezamiento, aprovecha los rastrojos de cultivos anteriores y reduce el laboreo de los suelos a su mínima expresión, la siembra directa permite extender temporalmente los ciclos agrícola -obteniendo ya no una, sino dos cosechas anuales- y expandir territorialmente la frontera agropecuaria, incorporando a tierras hasta entonces poco aptas para el cultivo oleaginoso. Y, como en una suerte de 'efecto cascada', la forma de trabajo agrícola opera aumentando la quimificación del campo, sustituyendo a los graminicidas por herbicidas de acción global (Silveira, 2003b) - glifosato y glufosinato de amonio, atrazina-, exigiendo aplicaciones más abundantes y frecuentes de abono sintético -fertilizantes

fosfatados y nitrogenados- y suplantando al trabajo vivo por el trabajo muerto -la adopción de esa técnica implicó un ahorro de fuerza laboral que oscila entre el 28% y el 37%-. Impera así un sistema técnico que, configurado sobre la base de la utilización de una única simiente, un único agro-químico y un único método de implantación, funciona a partir de la nueva articulación entre los calendarios agrícolas, el área explotada y la productividad efectivamente alcanzada, azuzando la actual crono-expansión de la frontera agropecuaria.

No es un secreto, a su vez, que el auge de tal suerte de 'agricultura profesional', con sus exigencias de tecnificación y cientifización, aumentó la necesidad de capital adelantado en el medio rural, permitiendo al capital financiero penetrar con renovados bríos en el campo; de ahí que el crédito agropecuario se incrementara, entre 1991 y 2001, un 193,9% (Ghezán, Mateos & Elverdín, 2001). Sin embargo, la lógica del endeudamiento bancario condujo a una situación de quebranto generalizado a mediados de los años noventa, pues determinó la desaparición de 87.688 explotaciones en todo el país (INDEC, 2005), esto es, casi la cuarta parte (24,5%) de las unidades registradas por el Censo Nacional Agropecuario de 1988. Teubal (2006) explica que, a raíz de un crecimiento del 1.300% en los valores originales de los créditos contraídos, casi 10 millones de hectáreas fueron rematadas, y otros 12 millones adicionales, hipotecados. Y, por añadidura, como el Estado nacional ya no interviene para mitigar o compensar las fluctuaciones de los precios, la exclusión del sistema sufrida por parte de los pequeños agricultores se intensifica, aunque la producción aumente: la obtención de la cosecha más abundante de la historia argentina -año 2003- fue concomitante respecto de la imparable desaparición, en plena pampa húmeda, de tres establecimientos agropecuarios por día (Pengue, 2004).

No obstante, el capital financiero es portador de otro importante dato, íntimamente conectado con las variables anteriores: la multiplicación de la lógica del arrendamiento que, desenvolviéndose al compás de la penetración de capitales extra-agrarios, permite a conglomerados constituidos por Fondos de Inversión y *pools* de siembra formados por

bancos extranjeros, inversores foráneos, agroindustrias, compañías de seguros, AFJP's, firmas de insumos, contratistas de maquinaria, escribanías y grandes productores, usufructuar las tierras de aquellos estratos de pequeños y medianos productores cuyos campos todavía subsisten a la voracidad de sus acreedores. Si bien el Censo Nacional Agropecuario de 2002 revela que la práctica del arrendamiento se impone en aproximadamente el 11,5% de la superficie explotada (INDEC, 2005), actualmente se estima que, en la pampa húmeda, esos guarismos rebasan el 77%. Obediente tanto al cambio generacional de los agricultores (Pengue, 2004) cuanto al bajo valor de la tierra - en Argentina, su precio es, a igualdad de rendimientos, doce veces menor que en Europa o Estados Unidos (Manzanal, 2000)-, ese proceso diseña una nueva división del trabajo que, fundada en la diversificación de los riesgos agro-climáticos, las economías de escala y la dispersión geográfica de los cultivos, permite a los agentes hegemónicos obtener de tierras de terceros casi la totalidad de su producción, conseguir el máximo beneficio en el corto plazo, cubrir la pérdida de determinadas cosechas con otras producciones agrícolas y drenar sus ganancias hacia fondos agroganaderos o la especulación financiera. Extractiva por definición, esa racionalidad agota rápidamente los suelos, de tal suerte que los pequeños y medianos productores quedan impedidos de reingresar al circuito productivo cuando los actores involucrados se retiran raudamente; el endeudamiento preexistente, las altas tasas de interés y la destrucción de los campos operan exacerbando la concentración de la tierra, porque las otrora superficies alquiladas acaban cayendo en manos de los *pools* de siembra después de los remates bancarios.

Sabido es que la soja, en virtud de esa compleja trama de solidaridades técnico-organizacionales, se convirtió en el motor del campo argentino, más también en su principal vector de desestructuración productiva, social y ambiental; un vasto arsenal de datos empíricos avala esta última aseveración. Si el número total de tambos se redujo a la mitad y la superficie destinada al arroz y el maíz disminuyó un 44,1% y un 26,2% entre 1997 y 2002, el hato ganadero descendió a valores mínimos,

expulsando a la actividad hacia áreas marginales (Rofman *et al.*, 2003) y alentando la concentración de animales en *feed-lots* (García *et al.*, 2008). Otrora abocadas al cultivo de papa y batata, numerosas áreas hortícolas sólo producen, hoy día, soja; paralelamente, la caña de azúcar y el algodón acabaron siendo expulsados hacia zonas marginales, o quedaron confinados a las áreas de mayor arraigo histórico. Y el maní y el girasol -únicas producciones oleaginosas en las que Argentina detenta una posición dominante a nivel mundial- fueron despojadas del 29% y el 12,4% de la superficie implantada, respectivamente. Se asiste, pues, a un proceso de producción de escasez en lo que respecta al desenvolvimiento de las funciones agropecuarias subordinadas y la producción de alimentos básicos tradicionales y, paralelamente, de reforzamiento de la exclusión social -cada hectárea de soja genera apenas un puesto laboral (contabilizando el empleo directo e indirecto), en oposición a los sesenta puestos directos generados por una hectárea de cultivos industriales-. La soja supone una auténtica verticalización del campo argentino, y se revela, además, como una producción innecesaria -según la óptica marxista, una producción orientada al exterior ajena a los intereses de la mayoría de la población, e incluso francamente opuesta a éstos-; de ahí la paradoja de que, en el quinto país exportador agroalimentario del planeta -capaz de satisfacer las necesidades de una población diez veces mayor a la que posee-, perezcan cada año 30.000 niños a raíz de carencias nutricionales (Teubal, 2003), lo que lleva a la FAO a considerar a la Argentina como el peor caso mundial de correlación entre producción y seguridad alimentaria.

Originado en las postrimerías del Siglo XX, el nuevo patrón o modelo hegemónico de modernidad rural es, por definición, excluyente. Nadie ignora que la necesidad de ampliación de la frontera agrícola expulsa, en nombre del progreso, a campesinos y aborígenes de sus tierras ancestrales, socavando las bases de sustentación de sus economías de subsistencia y empujándolos a migrar hacia las ciudades, donde pasan a engrosar los ya de por sí abultados cinturones urbanos de pobreza y miseria. Obtenidos con el beneplácito del poder

político, títulos apócrifos de propiedad y permisos de deforestación permiten a consorcios agropecuarios, grandes productores de la pampa húmeda, grupos económicos, complejos agroindustriales y empresas de desmontes concretar la llamada 'fabricación de campos' en el norte del país; de ahí que la tasa de deforestación anual de provincias como Salta (0,60%), Tucumán (0,68%), San Luis (0,82%) y Santa Fe (0,95%) duplique y triplique holgadamente, durante el lapso 1998-2002, a la media mundial (0,23%); a su vez, Santiago del Estero (1,18%) y Córdoba (2,93%) exhibían guarismos 1,51 y 3,75 veces superiores al promedio africano (0,78%). Y en lugar de ser atenuada, tal situación se agravó durante el quinquenio 2002-2006, lapso en cual la tasa anual de deforestación argentina resultó un 42% superior respecto de las ya inquietantes cifras verificadas en el lustro anterior, tornándose extrema en los casos de Salta (113,5%) y Santiago del Estero (71,6%) (SAyDS, 2005; 2007). Signado por la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de tierras otrora fértiles y el significativo aumento de los riesgos y catástrofes por inundaciones que suelen asolar al norte argentino, he aquí un nuevo episodio del violento proceso de modernización rural.

Otro factor a considerar son las fumigaciones aéreas y terrestres de glifosato, que no sólo contaminan a otras plantaciones, degradan los suelos, emponzoñan el aire y las aguas superficiales y subterráneas, aniquilan la fauna y la flora y provocan la aparición de malezas resistentes a ese agro-tóxico -lo cual obliga a aumentar las dosis, en tanto preparan el camino para la comercialización de productos análogos aún más peligrosos, generalmente prohibidos en los países centrales-, sino que generan, severos problemas de salud (lupus, alergias, afecciones inmunológicas, cáncer, etc) en los poblados y ciudades linderas a los campos. Y, a su vez, la simbiosis de la siembra directa con la soja RR, la falta de rotación, la sobreexplotación del suelo y el uso intensivo de agro-químicos convierte a esa técnica en un acicate a la desertificación, resultante de la salinización y compactación de los suelos, e imprime nuevos bríos a la generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI); después de la caña de azúcar, la soja es el principal cultivo

implicado en la emisión nacional de GEI (Gómez Lende, 2008). Son las principales consecuencias derivadas del imperio del nuevo modelo agropecuario instaurado a partir de la irrupción, en el territorio argentino, del medio técnico-científico-informacional.

4. ORDEN GLOBAL Y FUNCIONES REGIONALES: DE LA IRRACIONALIDAD A LA RACIONALIZACIÓN

Al igual que la acción humana, el espacio geográfico es compartimentado según distintos niveles de racionalidad. Surge así la posibilidad de identificar a los espacios de la racionalidad, áreas de ejercicio de actividades o funciones 'racionales' que sugieren una pronta y adecuada respuesta a las demandas de agentes de similares características, permitiendo que el encuentro entre la acción pretendida y el objeto disponible se desarrolle con el máximo de eficacia; todo esto mucho depende de la técnica contenida en ambas instancias, lo cual revela el predominio de la lógica de la naturaleza artificializada, siempre deseosa de imitar y superar a la naturaleza natural (Santos, 1996a). No obstante, esa definición de espacio racional es un tanto restrictiva y limitada, toda vez que ella no apunta a cualquier racionalidad, sino a la dominante. Los espacios de la racionalidad son aquellos donde la lógica hegemónica se ejerce como un acto de imperio, desarrollando fuerzas centrífugas o expansivas, determinantes y dominantes que, gracias a su poder de contagio, conducen a la unificación y homogeneización de formas y funciones (Santos, 2000). La soja transgénica reúne todo este conjunto de rasgos, lo cual sin duda le permite revelarse como expresión por excelencia del proceso de racionalización en el campo argentino. Y como la implantación y diseminación de objetos modernos y acciones hegemónicas suele realizarse a costa de la longevidad de funciones propias de otros tiempos, el territorio es reutilizado de modo tal que los vestigios del pasado acaban siendo borrados o apagados con las letras de la historia del presente (Silveira, 1999). Ora suprimidas, ora relegadas a áreas menos valiosas, las actividades más antiguas

suelen abandonar a los lugares que reservados al imperio de la nueva agricultura de exportación.

No obstante, la razón hegemónica suele ser única; el consenso respecto a ella, limitado; y la producción de paradojas y contradicciones opuestas a su predominio, múltiple. Otras situaciones, llamadas irracionales por quienes desearían ver como única a la racionalidad hegemónica, emergen inexorablemente a la luz del nuevo modelo, manifestándose como fuerzas que, relativamente divergentes de los designios del orden global, configuran situaciones no razonables, las cuales involucran a los pobres y a los excluidos, a las actividades marginales -tradicional o recientemente marginalizadas- y a las áreas menos modernas (Santos, 1996a; 2000). Otras funciones agrícolas, distintas de la soja y forjadas en el curso de modernidades remotas, despuntan como la contracara de la reciente expansión oleaginosa sufrida por el campo argentino; en vez de difundirse masivamente en el país, esas especializaciones productivas permanecen circunscriptas a una escala geográfica limitada generalmente al ámbito regional, revelándose estratégicas sólo para la estructuración de algunos cotidianos locales, y a veces -cuando se muestran relativamente envejecidas- constituyen fieles reproducciones de estructuras pretéritas: los cultivos industriales -algodón, caña de azúcar, yerba-mate-, la citricultura y la industria forestal se expresan, en Argentina, como usos del territorio diversos o distintos de la racionalidad hegemónica. Opuestas a la uniformización sojera propugnada por la lógica dominante en estado puro, las regiones continúan así diferenciándose, como pretende Roca (1989), a partir de la estabilidad de sus prácticas agrícolas. No sobresalen aquí variables-clave del período actual, sino funciones específicas, emblemáticas de ciertos lugares, generalmente aquejadas por crisis cíclicas de sobreproducción y cuya genealogía corresponde a épocas distantes; todas ellas componen hoy situaciones irracionales, frente a la pérdida de mercados y la caída de precios.

Si el análisis se limitara estrictamente a esa cuestión, todo sería demasiado sencillo y lineal: desestructuradas por los embates de un modelo social, económico y espacial cada vez más excluyente, las actividades marginales

deben, en aras de su subsistencia, ensayar estrategias de adaptación y reorganización -otra forma de racionalización-, convirtiéndose en sede de un delicado contrapunto entre pasado y presente, lo global y lo local, verticalidades y horizontalidades; ellas se debaten entre su fidelidad a la historia y la voluntad de sobrevivir. Sometidas a una lógica exógena que determina, en cuestión de pocos años, su prosperidad u ostracismo, todas esas funciones han sido fragmentariamente reestructuradas, parcialmente globalizadas, incompletamente racionalizadas. Oscilan, como en una montaña rusa, en frágil equilibrio, a veces proclives a la racionalidad, la modernización y la permanencia, otras a la irracionalidad, la obsolescencia y la desaparición, según la relativa permeabilidad de sus formas y contenidos a los datos del período. En ese esquema, algunas especializaciones expresan rupturas, en virtud de las cuales los espacios derivados se tornan agotados y repulsivos para la actividad, merced al advenimiento de una nueva función y / o al envejecimiento de ciertos sistemas técnicos, lo cual trae aparejado, para los lugares, una pérdida de productividad (Silveira, 1999). Y como al mismo tiempo las relaciones de subordinación externamente impuestas se vuelven internas, instaurando una tensión e incluso una competencia entre las variables hegemónicas, ellas no sólo son sometidas, directamente o indirectamente, al imperio de la soja, viendo limitado su desenvolvimiento y reproducción, sino que pasan a entablar una disputa recíproca por el uso del territorio: la citricultura avanzó sobre las tierras abandonadas por la caña de azúcar, y la silvicultura se benefició con la crisis yerbatera.

No obstante, aunque los casos aquí analizados denotan, desde una perspectiva más amplia, 'irracionalidades' -se trata de actividades que persisten a pesar de los embates del modelo sojero e implican a lugares que siguen definiéndose a partir su incapacidad para abrazar completamente la lógica dominante (Santos, 1996a)-, esas situaciones son singulares, heterogéneas, pues configuran un variado mosaico de posibilidades: algunas, empujadas hasta el borde mismo de la desaparición, parecen diluirse progresivamente pese a sus recurrentes intentos por alcanzar la

modernidad; otras continúan reproduciéndose con relativa regularidad; y finalmente otras incorporan, con relativo brío y éxito, los datos del período actual. Necesario es, pues, identificar a las situaciones -producciones y lugares- que se muestran más susceptibles de participar de cada nomenclatura, distinguir entre las funciones más prósperas y las menos dinámicas, analizando los diferentes episodios de racionalización experimentados por las mismas -intentos que, a menudo, no son más que desesperadas (y a veces inútiles) estrategias de supervivencia-, y estudiar el complejo tapiz de relaciones, nexos y solidaridades que a nivel local-regional se ha tejido entre las diversas actividades involucradas.

Expansión sojera y crisis algodoneira: desestructuración y fragmentación en Chaco

Originado en los albores de la conquista española, el cultivo de algodón, propio del nordeste argentino -Chaco, Corrientes, Formosa, norte santafesino, etc-, siempre ha sufrido crisis recurrentes. No fue sino en la década de 1980 cuando la convergencia de la rápida disminución de las cotizaciones de la bolsa neoyorquina y las plazas financieras londinenses, la masiva irrupción, en el mercado mundial, de algunos materiales sintéticos -nylon, poliéster, etc-, las contingencias climáticas, el recrudecimiento de la competencia internacional -liderada por la producción china, las exportaciones australianas, norteamericanas y europeas, y los subsidios estadounidenses- y la agudización de la concentración empresarial sumieron al sector algodoneiro doméstico en uno de sus típicos colapsos cíclicos; de ahí la sensible retracción del área sembrada (especialmente en Chaco), y el sistemático cierre de desmotadoras, hilanderías y aceiteras. Se acentuó, paralelamente, la brecha entre los pequeños productores -que se aferraron al algodón por tradición y seguridad respecto de la subsistencia de la unidad familiar- y los grandes propietarios -que comenzaron a rotar ese cultivo con la implantación de oleaginosas- (Valenzuela, 2006). No obstante, entre 1988 y 1997 surgió una época de bonanza para el algodón en los mercados internacionales, a raíz de un sostenido

incremento de los precios de la fibra, el cual condujo a un importante crecimiento de la superficie implantada, tanto en el país (82,4%) cuanto en Chaco (90,6%), donde el área algodонера pasó de 321.000 a 612.000 hectáreas, permitiendo la obtención, en 1997, de la mayor cosecha de la historia provincial - 622.700 toneladas- (SAGPyA, 2007a). Sin embargo, la imposición, a partir de finales del Siglo XX, de las lógicas propias de una agricultura de exportación globalizada y científizada, implicó que los ritmos de expansión o retroceso del sector algodnero dejaran de obedecer sólo a las fluctuaciones de los precios de la fibra, la cotización internacional del petróleo y sus derivados, los desastres climáticos o la virulencia de las plagas, para pasar a ser también cadenciados por la penetración, en lo local, de otra variable externa todavía más desestructurante: la soja transgénica.

Solidaridades entabladas y reproducidas entre la introducción de la soja RR -asociada, en parte, a cambios suscitados en el régimen de lluvias, que convirtieron a tierras otrora marginales en suelos aptos para la expansión oleaginosa-, la caída de los precios de la fibra, las cuantiosas pérdidas ocasionadas al sector por las inundaciones y la plaga de picudo del algodnero y el endeudamiento financiero derivado de los pagos a cosecha futura, condenaron al ostracismo a una función agrícola propia de otros tiempos; así pues, mientras la superficie chaqueña destinada a la soja crecía, entre 1997 y 2002, un 387,8% -pasando de 123.000 a 600.000 hectáreas-, el algodón perdía el 84,8% de su área, la cual quedó reducida a apenas 93.000 hectáreas, esto es, el 5% de las tierras ocupadas por ese cultivo cuarenta años atrás: de ahí que sea legítimo aseverar que al menos el 91,2% de la expansión sojera se concretó a expensas del algodón, cultivo que quedó relegado a apenas algunos departamentos (INDEC, 2005). Estudiando la evolución de la agricultura chaqueña durante los últimos años, Valenzuela (2004) explica que algunos grandes productores cordobeses y santafesinos adquirieron o arrendaron la mayor parte de los campos provinciales cuya superficie rebasaba las 200 hectáreas, aprovechando el menor valor relativo de las tierras chaqueñas: en efecto, y a

pesar de que el precio por hectárea pasó, entre 1996 y 2006, de 100 a 500 dólares, éste era cuatro veces inferior al de la pampa húmeda - 12.000 dólares por hectárea-; procurando ampliar la frontera oleaginosa y drenar sus cosechas hacia los centros agroindustriales de Córdoba y Santa Fe, algunos agentes hegemónicos impusieron una metamorfosis estructural a los campos chaqueños, que, según esa autora (Valenzuela, 2004), pasaron a aportar el 11% de la superficie nacional capitalizada por la soja en los últimos años, toda vez que ese cultivo absorbió la mitad -1.000 unidades- de las explotaciones otrora abocadas a la obtención de fibra. No obstante, y aunque las cosechas algodneras se redujeron un 81,8% entre 1997 y 2002 -cayendo a guarismos inferiores a las 113.330 toneladas (SAGPyA, 2007a)-, las crisis de sobreproducción del sector continuaron agravándose. Otrora cuarto exportador mundial de algodón, Argentina se vio obligada, a raíz de la magnitud del colapso en que fue sumergido el sector, a importar fibra norteamericana y brasileña para así satisfacer el consumo interno.

La soja continuaba, paralelamente, su implacable avance; alentados por un costo de implantación tres veces menor -227 dólares por hectárea para el algodón contra 80 dólares por hectárea para la soja-, los grandes y medianos productores sucumbían a una racionalidad signada por la reconversión hacia el monocultivo oleaginoso, en tanto que el segmento tradicionalmente algodnero tendía hacia su inexorable desaparición (Valenzuela, 2004; 2006). Empirizado por los nuevos sistemas de objetos y acciones encarnados por la llamada 'sojización' y la siembra directa, el nuevo uso agrícola del territorio, propio de este período técnico-científico-informacional, se esparcía con inusitada rapidez en el ámbito 'regional': la superficie chaqueña sembrada con soja creció un 1.289,0% entre 1990 y 2003 -lo cual equivale a decir que aumentaba a razón del 40% anual, duplicándose cada dos años y medio-, y las cosechas obtenidas, un 1.045,2%, alcanzando en 2006 las 1.396.480 toneladas (SAGPyA, 2007a). Y los suelos que la soja no conquistó en detrimento del algodón, lo hizo a expensas del bosque nativo; por eso la tasa anual de deforestación de Chaco (0,57%) duplicó, entre 1998 y 2002, a la media mundial

(0,23%) (SAyDS, 2005). Obtenidos con el beneplácito del poder político provincial, títulos apócrifos de propiedad y permisos de deforestación sembraron la devastación en las comunidades aborígenes y campesinas, destruyendo a economías de subsistencia basadas en la caza, la recolección y la agricultura orgánica. Y cuando la violencia simbólica de las normas jurídicas no basta para amedrentar a sus legítimos propietarios, mecanismos más explícitos de coerción y dominación -desalojos, bloqueo al acceso del suministro de agua, etc- los obligan a abandonar las tierras. No es extraño, asimismo, que incluso vastas superficies sean 'vendidas' con sus habitantes dentro. Otrora cubiertas por densos y frondosos bosques, grandes superficies del Chaco son arrasadas con topadoras y luego calcinadas, destruyendo así el medio de vida y la fuente de sustento de numerosas economías campesinas y comunidades aborígenes, e impidiéndoles el aprovechamiento de la leña para acelerar su expulsión, todo lo cual los empuja a migrar masiva y compulsivamente hacia las ciudades y los pueblos más próximos. Notable ha sido, en efecto, el rápido vaciamiento demográfico del campo chaqueño, que expulsó a más de 68.000 personas entre 1991 y 2001 (INDEC, 2003); engrosando abultados cinturones urbanos de pobreza y miseria extremas, los pueblos nativos se hallan en una crítica situación, acorralados por enfermedades, sed, inanición y desnutrición.

Santos (2000) apunta que el modelo hegemónico es por lo general planeado para ser, en su acción individual, indiferente a su entorno; de allí a, literalmente, conspirar contra la propia vida, media un solo paso. Otrora un paraíso algodónero, el poblado chaqueño de Gancedo es la principal localidad provincial afectada por las fumigaciones aéreas con glifosato, merced a la inusitada presión oleaginosa, que empuja a los sembradíos de soja transgénica hasta el borde mismo del ejido urbano; pululan los casos de leucemia y otros tipos de cáncer, así como también de lupus, púrpura, alergias y enfermedades inmunológicas (Valenzuela, 2004; Teubal, 2006). No obstante, esas funestas consecuencias alcanzan límites insospechados en la faja nororiental chaqueña, donde, según Pasquis (2004), la convergencia

de ciclos de lluvias más intensos y la conversión de bosques y pastizales en campos agrícolas intensifican los riesgos derivados de la utilización intensiva de agro-tóxicos. He aquí un elocuente ejemplo empírico de cómo muchos de los usos del territorio se tornan, en la modernidad actual, irracionales frente a los intereses de la mayor parte de la población y la sociedad local (Santos & Silveira, 2001).

No sólo la soja atenta contra la reproducción del algodón en Chaco; en efecto, la competencia que suponen los nuevos frentes algodóneros surgidos en otros rincones del país se ha erigido, también, en un factor ciertamente no desdeñable en lo que concierne a la agudización de la crisis chaqueña. Nadie ignora que el sector algodónero provincial siempre se caracterizó por la inestabilidad locacional del segmento industrial del circuito -desmotadoras, hilanderías-, que a menudo privilegian a Corrientes en detrimento de Chaco, en función de determinadas ventajas fiscales y tributarias; lo novedoso es, sin embargo, el rediseño del reparto territorial de la actividad primaria: así pues, mientras el área sembrada retrocedía en Chaco, aumentaba significativamente en La Rioja, Santiago del Estero y Salta, los llamados oasis del noroeste, cuya participación en la cosecha nacional de algodón pasó, en muy corto lapso, del 8,4% al 21,2% (SAGPyA, 2007a). Se trata de un fenómeno relativamente reciente, que obedece a los programas de diferimiento impositivo que a finales de la década de 1990 desarrollaron los gobiernos riojano, catamarqueño y salteño para fomentar la llegada de grandes inversiones de grupos económicos vernáculos y firmas extranjeras -Eurnekián, Ritex, Alpargatas, Grafa, Karatex, Tipoiti, Kayne-. Surgen así, con las nuevas plantaciones, islotes de modernidad agrícola que desde un principio se revelan claramente diferenciados de los antiguos y más tradicionales cinturones algodóneros: nacen ya tecnificados y cientificados; son explotaciones intensivas que, al conjugar la siembra con semillas de alto rendimiento importadas desde los Estados Unidos, la irrigación vía modernos sistemas por aspersión de pivote central y la adopción de sistemas mecanizados de cosecha, protagonizan una crono-expansión de la frontera agrícola que permite obtener una producción de calidad y

rindes muy superiores a los de las clásicas áreas de secano y, paralelamente, disputar posiciones en el mercado mundial con Israel y Australia.

No obstante, y aunque el algodón se haya convertido en una expresión de manifiesta irracionalidad en lo que atañe a la evolución de la agricultura chaqueña, al mismo tiempo se asistió al advenimiento de una tendencia a la racionalización regional o local de la actividad que, desarrollada a partir de la incorporación de algunos datos del acontecer jerárquico -extranjerización, biotecnología, mecanización, etc-, consagró un nuevo modelo productivo, diseñado para obedecer a un patrón cada más extrovertido de desenvolvimiento de dicha función. Si bien el país perdió posiciones en los mercados internacionales, las exportaciones de algodón argentino, en vez de desaparecer, aumentaron, incrementando su incidencia sobre las cosechas -pasó del 23% al 75%-: he aquí la paradoja de una especialización agrícola cuya producción, débil, intermitente y escasa, es sistemáticamente drenada hacia el mercado mundial, sobre todo a Brasil, con arreglo a un singular esquema en el que cuanto más reducidos son los saldos exportables, mayor es la participación del vecino país como destino del algodón argentino; y al mismo tiempo que Argentina vuelca al exterior su exangüe producción algodonera, Brasil y el Sudeste Asiático cooptan el mercado doméstico, satisfaciendo la quinta parte del consumo textil nacional. No es extraño que, ante el imperio de esa lógica, el sector algodonero chaqueño haya experimentado una incipiente recuperación entre 2002 y 2005, recobrando parte de la superficie perdida -ésta creció un 171%, situándose en el orden de las 252.000 hectáreas- e incrementando sustancialmente las cosechas -éstas alcanzaron las 285.000 toneladas, aumentando un 151,7%- (SAGPyA, 2007a). Se trata de un episodio de racionalización: espacios agrícolas antaño gobernados por el consumo interno se vuelven más permeables a las exigencias externas dictadas por los vaivenes de una demanda carioca en sostenida merma luego de la devaluación del real.

Originada en la contracción padecida por el sector a finales del Siglo XX, y luego afianzada a partir de su incompleta recuperación a principios de este milenio, la concentración de

tierras en el Chaco algodonero se consolidó y exacerbó, en virtud de las estrategias de integración vertical de la producción y arrendamiento de campos desplegadas por las grandes firmas desmotadoras y los *pools* de siembra; según el último Censo Nacional Agropecuario, las grandes fincas -con superficies que oscilan entre 1.000 y 3.000 hectáreas- explicaban en 2002 el 25,2% de las explotaciones y el 74,9% del área implantada (INDEC, 2005). Otro dato, íntimamente ligado al anterior, atañe a la incorporación del cambio tecnológico, plasmada en la irrupción y / o propagación, según el caso, de tres variables propias de este medio técnico-científico-informacional: la transgénesis, la siembra directa y la cosecha mecanizada. Introducido por Genética Mandiyú -subsidiaria de la firma norteamericana Monsanto- en el mercado doméstico, y producido en Catamarca y Chaco a partir de acuerdos de cooperación entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Monsanto y Delta & Pine Land (Silveira, 2003b), el algodón Bt se esparce rápidamente en el territorio (INDEC, 2005); basta con decir que esta variedad -resultante de un proceso de ingeniería genética que consiste en inocular en las simientes el gen de una bacteria (*Bacillus thuringensis*) que produce toxinas proteicas letales para varios grupos taxonómicos de insectos, entre ellos lepidópteros como las orugas del capullo y la hoja del algodonero-, que en 1998 representaba apenas el 0,7% de la superficie sembrada, cinco años después ocupaba más de la quinta parte (Roca, 2003). Y esa cientifización del trabajo agrícola, al exigir el aumento de la densidad de los cultivos, la aplicación de controles de plagas más rigurosos, la adopción de reguladores de crecimiento y defoliantes, la incorporación de variedades de alto rendimiento y la existencia de grandes escalas de producción, introduce los sistemismos portados por las innovaciones materiales y organizacionales de la agricultura globalizada; por eso, aunque la siembra directa explique apenas el 3,4% del área implantada en Chaco (INDEC, 2005), esas semillas forjan una verticalidad, una regulación externa que, imprimiéndose en las áreas agrícolas, alumbró una configuración territorial coincidente respecto del mapa de la cosecha mecanizada.

La rápida propagación de las cosechadoras mecánicas, equipadas con GPS, *software* mapeador y monitores instantáneos de rendimiento se erige en ariete de la modernización del trabajo agrícola regional; según Silveira (2003b), su nivel de penetración asciende a una máquina cada mil hectáreas cultivadas. Esa maquinaria, encarnación de una nueva camada de objetos técnico-científicos, consiguió, gracias a su más amplia capacidad operativa -el ritmo de recolección es 100 veces más rápido que el trabajo manual-, obtener el 70% de la producción algodonera y, por consiguiente, desplazar a la mitad de los braceros 'golondrina', coadyuvando así al agravamiento de la crisis social chaqueña y el éxodo rural; con todo, esa modalidad de recolección es obligada a coexistir con las más antiguas formas de zafra, las cuales se desarrollan en condiciones de casi absoluta informalidad, merced al imperio de la racionalidad del capital, que considera onerosos a los contratos estables, en virtud de la prolongada porosidad de la jornada laboral agrícola. Todas las características previamente citadas permitieron a las grandes fincas chaqueñas adquirir, y a pesar de la decadencia del sector algodonero local, una jerarquía global, sobresaliendo por sus reducidos costos de producción, situados entre los más bajos del mundo (AACREA, 2004a). No obstante, ese dato pretende ocultar la paradoja dada por el declive de la productividad agrícola: pese a todas las innovaciones técnico-científicas adoptadas, los rindes no han crecido, sino que cayeron un 4,1% entre 1988 y 2005 (SAGPyA, 2007a).

Solidaridades entabladas entre la irrupción de las agroindustrias en las plantaciones, la concentración de tierras, la mecanización de la producción, la comercialización a granel y la expansión de la agricultura bajo contrato operan agudizando el contraste entre la creciente capacidad de comando ganada por las grandes fincas, las desmotadoras y las hilanderías, y el vaciamiento funcional de algunos cotidianos locales, derivado tanto del desplazamiento de las cooperativas cuanto de la desaparición de ciertos intermediarios comerciales tradicionales, como el llamado 'bolichero'. Otrora importante, ese actor del circuito permanece actualmente

relegado a apenas la zona oriental chaqueña y a gran parte de Formosa, donde el régimen de lluvias imposibilita el ingreso de las cosechadoras mecánicas; es, pues, un dato del medio natural el que permite la reproducción de una racionalidad más antigua, a raíz de la cual los minifundios y las áreas marginales sobreviven hoy día prácticamente intactas, con sus bueyes y caballos, mochilas fumigadoras, arados de mancera y rastras de púas (Rofman, 2000), recreando en pleno Siglo XXI condiciones propias de inicios de la centuria anterior. Aisladas de los circuitos globalizados de una agricultura de exportación tecnificada y científizada, esas economías campesinas participan, gracias a la persistencia de sus primitivos sistemas de trueque y su escasa articulación con las agroindustrias, de la construcción de una irracionalidad configurada por un conjunto de sistemas de objetos y sistemas de acciones propio de otros tiempos que, recreando las inercias del pasado, deforma los contenidos de la modernidad coetánea. La agricultura chaqueña se revela, así, como recortes espaciales de un acontecer homólogo que, reelaborado para acoger a ciertas formas y funciones hegemónicas, resquebraja la cohesión de un cotidiano 'regional' históricamente estructurado en derredor del tradicional desenvolvimiento de una función agrícola antigua; paralelamente, ella revela el imperio de una oleada racionalizadora signada por fenómenos como la contracción territorial, la decadencia económica, la segmentación productiva y la desestructuración social.

Oposición y complementariedad en Tucumán: el complejo citrícola-azucarero

Introducida en Latinoamérica y el Caribe por los conquistadores españoles, la caña de azúcar se arraigó tempranamente en el noroeste argentino, especialmente en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. No obstante, el primer apogeo local de la actividad recién se suscitó en el contexto del modelo agroexportador, cuando las solidaridades tejidas entre la llegada del ferrocarril -que privilegió a Tucumán en desmedro de Salta y Jujuy-, la prohibición de importación del azúcar brasileño y cubano y el aporte financiero de los bancos nacionales de la

época permitieron a las plantaciones y agroindustrias tucumanas alcanzar el mercado del litoral, en un marco signado por la concentración de tierras y la reducción del número de ingenios -de 82 a 34 entre 1881 y 1887- (Calvo, 2008). Son, de hecho, típicos de la historia del azúcar en el norte argentino los fenómenos de crisis estructural del minifundio, clausura de agroindustrias, contracción del área cultivada y concentración de la propiedad; Tucumán ha sobresalido históricamente no tanto por sus rendimientos agrícolas e industriales -inferiores a los de Salta y Jujuy- como por la relativa atomización de la tenencia de la tierra, merced a la proliferación de las llamadas cooperativas cañeras. Si bien la lógica burocrática imperante durante el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones dio lugar a la creación de la Dirección Nacional del Azúcar (DNA) -destinada a mitigar las crisis de sobreproducción-, las décadas siguientes fueron escenario de una importante acumulación de *stocks* que decantó en un segundo episodio de racionalización, esta vez plasmado en el 'Operativo Tucumán', de 1966; éste, al imponer cupos para la producción, supuso la pérdida de 80.000 hectáreas implantadas, el cierre de 11 de los 27 ingenios existentes y la expulsión de 1.000 cañeros y 50.000 obreros y cosecheros, todo lo cual redundó en una masiva emigración campo-ciudad y en un marcado retroceso demográfico provincial: de ahí que la población tucumana se redujera un 17,6% entre 1965 y 1970, pasando de 930.000 a 766.000 habitantes. No fue sino hasta los años ochenta cuando las cooperativas cañeras lograron resurgir, de la mano del 'sistema de maquila', producto de las nuevas relaciones establecidas entre ingenios y agricultores: los primeros acordaban con los segundos la molienda exigiendo, en contrapartida, el 47% de la producción.

Otrora sometida a controles de precios mínimos y cupos máximos de siembra y cosecha, la cadena azucarera experimentó una nueva ruptura en las postrimerías del Siglo XX, derivada de la eliminación de la DNA y la derogación de la Ley Nacional del Azúcar; así, los espacios de la producción quedaron directamente librados a los vaivenes de las cotizaciones de la Bolsa de Londres. Surgía entonces una tercera fase de racionalización,

fundada en el imperio del sistema de poder neoliberal y estructurada en derredor de vectores externos como el ingreso de Argentina al MERCOSUR y la implementación, en ese marco, de un régimen arancelario transitorio, orientado a permitir, en el corto plazo, la penetración del azúcar brasileño en el mercado doméstico. Nadie ignora el papel hegemónico que Brasil desempeña en el sector: es el primer productor y exportador mundial, con un cañaveral 25 veces más grande que el doméstico; sólo el nordeste carioca produce el triple de caña que todo el complejo azucarero argentino. Y como el azúcar constituye, en el vecino país, un sub-producto de un sistema sucro-alcoholero único en el mundo -largamente desarrollado gracias a generosos subsidios y férreas regulaciones-, Argentina siempre ha competido en inferioridad de condiciones, siendo afectada por la hegemonía brasileña en la fijación de los precios internacionales. No obstante, algunos obstáculos jurídicos, como las sucesivas prórrogas otorgadas a los sistemas de protección comercial, la implementación de un derecho adicional de importación destinado a desalentar el ingreso de la producción carioca y la imposición de normas que impiden la importación subsidiada desde Brasil testimonian, en principio, la persistencia de algunas métricas burocráticas pretéritas, que si bien impiden o tornan menos fluida la difusión de la lógica del libre comercio, se revelan desfasadas con respecto a un escenario mundial en el que los principales países productores -Brasil, India, Unión Europea, China, Estados Unidos- no vacilan en proteger su mercado azucarero con barreras arancelarias y sanitarias, cuotas de exportación e importación y subsidios para amortiguar las graves crisis de sobreproducción que aquejan al sector.

La apertura del sector azucarero argentino determinó que la superficie tucumana implantada con caña de azúcar retrocediera ostensiblemente: ésta cayó un 22,7% entre 1990 y 2005, pasando de 250.000 a 193.210 hectáreas (SAGPyA, 2007a), sumergiendo a toda la provincia en un proceso generalizado de reconversión agrícola hacia cultivos más rentables, como las oleaginosas y los cítricos; paralelamente, la soja expandió su área un 184,8%, y el limón, un 76,5% -pasó de 19.220 a

33.925 hectáreas-, apoderándose, en este último caso, del 26% de las tierras otrora implantadas con caña. Si bien la genealogía de la citricultura se remonta también a la época colonial -conociendo su primer apogeo en la década de 1940 y afianzándose a partir de 1970-, nadie ignora que su expansión más significativa se ha desarrollado en tiempos recientes, convirtiendo a Argentina en líder del sector a nivel internacional -primer y tercer productor de limones y jugo de pomelo, respectivamente-; de hecho, Tucumán no se consagra apenas como la principal área citrícola del país -92,5% de la superficie implantada- (FEDERCITRUS, 2006), sino también en el primer productor mundial -25,0%- y el principal exportador nacional -63%- de limones (EXPORT.AR, 2005). De ahí que este último cultivo explique, junto a la caña de azúcar, no menos de las dos terceras partes del Producto Bruto Geográfico tucumano (AACREA, 2004b): del millón de toneladas que anualmente se obtienen, un 30% se orienta a satisfacer el consumo interno, complementar las cosechas japonesas y europeas y satisfacer la demanda de países no productores del sudeste asiático y Medio Oriente, en tanto que el 70% remanente se orienta a la elaboración de jugos concentrados, jarabes, aceites esenciales, aromas y cáscara deshidratada que, amén de satisfacer el consumo interno, abastecen a firmas globales productoras de aguas minerales y bebidas gaseosas y a industrias agroalimentarias, cosméticas y farmacéuticas de origen europeo, asiático y norteamericano; hasta los residuos derivados del procesamiento industrial del limón son absorbidos por países como Rusia, España, Holanda, Italia y Grecia, donde se utilizan como forraje para el ganado.

Existe, pues, una relación funcional de oposición o contradicción entre, por un lado, el declive de una función devenida, en principio, irracional -la actividad azucarera- y, por el otro, la concomitante expansión de otra función más 'racional' -la citricultura-, más permeable a insertarse en el moderno mapa dibujado por la nueva división territorial del trabajo agrícola: por un lado, localidades como Lules, Yerba Buena, Tafí Viejo y Burreyacú son los nuevos frentes citrícolas globalizados, nacidos de un reciente proceso de refuncionalización regional y metamorfoseados en sede de la sustitución del

modelo azucarero mercado-internista por una función más jerarquizada y extrovertida; por otro lado, departamentos tradicionalmente azucareros, como Cruz Alta, Simoca, Leales, Monteros, Alberdi, Chicligasta, Famaillá y Río Chico, ensayan una diversificación productiva orientada tanto a renovar las formas y funciones locales cuanto a reproducir la existencia de una división del trabajo más antigua. Tal situación se reforzó recientemente, a raíz del nuevo ímpetu ganado por el cultivo de caña de azúcar, que pasó ocupar, en 2007, 203.170 hectáreas (Calvo, 2008), recuperando parcialmente sus niveles de antaño. Notable es, además, la racionalización de esa actividad, dada a partir de un aumento en su nivel de extroversión; fomentada por el auge de la 'cuota azucarera norteamericana' y la creciente demanda mundial de bio-combustibles, la octuplicación de las exportaciones argentinas entre 1989 y 2005 determina que el comercio exterior pase a absorber el 25% de la producción nacional de azúcar refinada (SAGPyA, 2007b). Son, pues, las exigencias del mercado mundial las que animan ese retorno al modelo azucarero.

El auge del limón supone una respuesta 'adaptativa' a las recurrentes crisis de sobreproducción y descapitalización del complejo azucarero (Tadeo *et al*, 2001), no sólo en Tucumán, sino en todo el noroeste argentino: de ahí que hasta los más tradicionales ingenios azucareros del noroeste argentino (San Martín del Tabacal, Ledesma) acaben incorporándose al circuito productivo tejido por esa moderna división territorial del trabajo, imitando las estrategias de integración vertical de los conglomerados integrados (Macri, Expofrut, Citrusvil, Moño Azul, FAMA, Citromax) -grandes productores, modernas plantas de empaque, consorcios exportadores, industrias de jugos, aceites y jarabes-, que acaparan la mitad de la producción citrícola del complejo, y el 84% de la cosecha tucumana del limón; similar fenómeno ocurre en la propia cadena azucarera, donde las industrias tucumanas pasaron de concentrar en 1988 la mitad de las cosechas a absorber a comienzos del Siglo XXI las dos terceras partes: paralelamente, el 48,0% de la producción nacional de azúcar quedó en manos de apenas tres ingenios -Concepción, Ledesma y San Martín del Tabacal- (AACREA, 2004b;

2004c). Se acentúa, paralelamente, el fenómeno de la concentración de tierras; en efecto, y pese a la histórica importancia que el minifundio siempre ha ostentado en Tucumán, las estadísticas oficiales revelan que el 41% de los pequeños productores desapareció y que el número de explotaciones medianas -10 a 100 hectáreas- retrocedió un 64% (INDEC, 2005), dejando a esa provincia en una situación bastante similar a la de Salta y Jujuy, donde apenas dos empresas explotan el 90% de las plantaciones. Y algunas firmas hegemónicas -Coca & Cola, Pepsi, Danone, Kraft Foods, Nabisco, Nestlé, etc-, ante la necesidad de abastecerse regularmente de un insumo estratégico para la fabricación de alimentos y bebidas, estrechan su comando sobre los cañaverales y protagonizan frecuentes creaciones y / o compras de ingenios.

Otro rasgo a destacar, ciertamente común a ambas funciones agrícolas, atañe a su permeabilidad en cuanto a la penetración de los datos propios de este período, concretada en una crono-expansión de la frontera agropecuaria plasmada en un sustancial aumento de los rendimientos y, por consiguiente, en el imperio de una racionalidad abocada a obtener mayores cosechas en una menor arena de producción: gracias a la implantación de variedades de limonero de alto rendimiento -Eureka y Lisboa- (INDEC, 2005), la producción creció un 128% entre 1991 y 2005 -pasó de 500.000 a 1.140.057 toneladas-, y los rindes por unidad de superficie, un 29,2% -pasaron de 26.015 a 33.605 kg/ha- (FEDERCITRUS, 2006). Solidaridades tejidas con otras variables, como el bajo índice de uso de agro-tóxicos y el control químico -funguicidas- y biotecnológico de plagas y enfermedades (cancrosis bacteriana, clorosis variegada, *greening* o 'enfermedad del cítrico verdozo', 'mancha negra', mosca del Mediterráneo, etc) -a su vez empirizadas a partir del desarrollo de la termoterapia, la obtención de plantas nucleares libres de virus a partir de individuos enfermos y la aplicación de técnicas de micro-injerto de ápices caulinares *in vitro*-, reflejan el imperio de la técnica sobre las fuerzas naturales, lo cual permite que Tucumán sortee las barreras paraancelarias impuestas por mercados otrora vedados a la producción argentina, como Estados Unidos y Japón, y se

inserte en un mapa mundial de producciones y demandas que excluye a otras áreas cítricas del país -el noroeste correntino, por ejemplo-.

Otra cuestión a subrayar es que la caña de azúcar tampoco ha sido ajena a ese mismo proceso de incorporación de contenidos de la modernidad actual; a raíz de la importación de variedades de alto rendimiento (NA 63-90, LCP 83-384) para la obtención de melaza y la implantación de simientes transgénicas resistentes a herbicidas (CP 65-357 y 65-350), presentes en el 51,5% de los cañaverales tucumanos (INDEC, 2005), la producción se incrementó ostensiblemente, aún en el marco de un proceso de sensible retracción del área sembrada: las cosechas aumentaron un 36,5% entre 1990 y 2005 -pasaron de 8.790.000 a 12.000.000 toneladas-, lo cual impulsó el crecimiento de los rindes agrícolas -crecieron un 46,7%, pasando de 42.347 a 62.138 kg/ha- (SAGPyA, 2007a) e industriales -hicieron lo propio en un 150%, gracias la modernización del equipamiento de los ingenios (máquinas centrífugas, trapiches, destilerías, usinas eléctricas, calderas)-. Y si bien el mayor nivel de integración vertical, las grandes escalas de explotación agrícola, el alto grado de tecnificación industrial y las condiciones agroecológicas más favorables, determinan que los rendimientos agrícolas y fabriles jujeño-salteños sigan siendo, con todo, más altos que los tucumanos, eso no impide a esta última provincia ganar una nueva jerarquía en el mapa agropecuario nacional, consagrándose como la principal productora nacional de etanol.

Obstando sus diferencias y singularidades, tanto el sector azucarero cuanto cítrico comparten un mismo problema: las recurrentes crisis de sobreproducción, fenómeno que últimamente se ha vuelto más notorio en el caso de la citricultura, a raíz de la saturación del mercado de derivados del limón, que opera acentuando la subordinación de las pequeñas explotaciones y los medianos productores no integrados, ya de por sí aquejados -en un contexto de marcado predominio de los procesos de integración vertical- por las rígidas normas de calidad y entrega que los macroactores del circuito les imponen para adquirir sus cosechas. En el circuito azucarero, en cambio, la 'desregulación' de la producción

primaria generó intersticios aptos para su colonización por parte del capital financiero que, en virtud de la ausencia de entes burocráticos que amortiguaran el impacto causado por el exceso de producción, pasó a operar como un regulador de los volúmenes de las cosechas; financiando una parte de las mismas, evitando la saturación del mercado interno y sosteniendo el precio del producto durante la evolución de la zafra, los bancos ensayan una moderna forma organizacional como el *warrant*, y así pasan a comandar, como agentes externos al sector agrario, los ritmos y temporalidades de funcionamiento del circuito.

Otro paralelismo se desprende del análisis de los respectivos mercados laborales. Nadie ignora que, en la actividad azucarera, la mecanización de las cosechas atenta contra la reproducción de las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo rural. Son, sin embargo, regulaciones y tiempos externos los que comandan esa tecnificación del trabajo agrícola, pues la remoción de las listas de excepción del MERCOSUR y la siempre latente e inminente apertura del mercado argentino al ingreso del azúcar brasileño penden como una verdadera espada de Damocles sobre empresarios y trabajadores, alentando a los primeros a reducir sus costos, y obligando a los segundos a temer por su subsistencia y resignar sus reivindicaciones laborales; así pues, las cosechadoras de última generación -con sus métodos semi-mecánicos e integrales, según Mayo (1995), 400 veces más rápidos y eficaces que la recolección manual-, al ser adoptadas en el 45,2% del área cañera tucumana y el 21,8% de las explotaciones provinciales, desplazan a gran parte de los migrantes salteños, tucumanos, jujeños, santiagueños y chaqueños que tradicionalmente eran reclutados por los grandes ingenios para una cosecha manual todavía presente, empero, en el 18,1% de las plantaciones y el 62,7% de las unidades productivas (INDEC, 2005). Obstando esa especificidad, tanto el azúcar como el limón manifiestan rasgos comunes: extrema precarización, informalidad y discontinuidad laboral, afianzamiento de la intermediación por subcontratación -vía consultoras y cooperativas, evitando los contratos en relación de dependencia- como práctica cada vez más

extendida, pago a destajo -que suele demandar, para cubrir las necesidades de reproducción de la unidad familiar, la incorporación de mujeres y niños al proceso productivo-, ausencia casi absoluta de derechos básicos -jubilación, obra social, asignaciones familiares- y uso extorsivo de los niveles locales y provinciales de desempleo como mecanismo de control social y disciplinamiento laboral; así, ambas funciones acaban revelándose como híbridos, en los que las solidaridades orgánicas derivadas de la articulación de los respectivos calendarios agrícolas y las migraciones estacionales a ellos asociadas sufren una desestructuración o verticalización, impuesta por un capital que se vale de la comunión de novedosas y antiguas estrategias para obtener un lucro mayor que combina modernas pautas laborales con resabios de relaciones cuasi-feudales o pre-capitalistas jurídicamente legitimadas por normas pretéritas¹. Objeto de un incompleto proceso de racionalización, tanto el circuito azucarero cuanto la cadena citrícola continúan siendo incapaces de incorporar, en su forma pura, los contenidos intrínsecos a la lógica hegemónica.

Ocaso y resurrección: yerba-mate y silvicultura en Misiones y el nordeste correntino

Si bien previamente desarrollado por la etnia guaraní, el cultivo de yerba-mate no se configuró en una especialización agrícola regional endémica de la provincia de Misiones y el norte correntino hasta la época colonial. Y, a partir de los siglos XVI y XVII, dicha actividad se convirtió en epicentro de las disputas libradas entre las misiones jesuitas y los encomenderos españoles en aras del control de la población aborígen y la explotación de los yerbales; a raíz de la posterior expulsión de la citada orden religiosa, el desenvolvimiento de esa función quedó en manos paraguayas primero y brasileñas después, estado de cosas que perduró hasta las postrimerías del Siglo XIX, cuando el Estado nacional alentó un vigoroso proceso de colonización del nordeste, basado en la cesión, a los recién llegados inmigrantes centro-europeos,

¹ En efecto, los trabajadores agrarios, mucho menos protegidos que el resto, se rigen por una ley que data de 1980, que no reconoce la jornada laboral de ocho horas ni un vínculo permanente con el empleador.

de parcelas emplazadas en tierras fiscales, a condición de plantar yerba en un porcentaje determinado de la superficie asignada. Suplantando a las importaciones cariocas, esa actividad agrícola se volvió, empero, víctima de agudas crisis cíclicas de sobreproducción, las cuales condujeron a la creación, en 1936, de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y su correspondiente mercado consignatario, que introdujeron controles tendientes a restringir el cultivo a partir tanto de la imposición de cupos de siembra y cosecha cuanto de la garantía de un precio estatal o 'político' de referencia; así pues, el Estado limitaba el avance del capital sobre la producción primaria, actuaba como contemporizador entre los intereses minifundistas e industriales, y operaba para consagrar la supremacía de los terratenientes de la pampa húmeda -los acuerdos rubricados con Brasil exigían el intercambio de trigo argentino por yerba carioca- (Gortari, 2008). No obstante, las crisis de sobreproducción no desaparecieron durante el régimen de acumulación estructurado en derredor de la industrialización sustitutiva de importaciones, sino que se manifestaron con mayor o menor crudeza, conforme los cupos de siembra eran más rígidos o flexibles, según la racionalidad burocrática imperante en cada fase.

No obstante, el primer episodio de racionalización de la actividad se produjo recién en los años setenta, cuando, a partir de la eliminación de algunos de los límites estatales sobre siembra y cosecha, la superficie implantada ascendió a 109.565 hectáreas, y la producción, a 133.436 toneladas (SAGPyA, 2007a), coadyuvando así un significativo desplome de los precios: iniciando un proceso dual de expansión y decadencia de la actividad que se extendió durante la década de 1980, las crisis de sobreproducción se volvieron aún más agudas que antaño, ocasionando un profundo colapso para los minifundios yerbateros. Segundo episodio de desestructuración 'regional', la supresión de la CRYM y su mercado consignatario le asestó en los albores del siguiente decenio el más duro golpe a la actividad: el área sembrada quedó librada a los intereses y estrategias de los agentes más poderosos del sector -molinos y secaderos-, y así la superficie implantada -que ya sumaba

172.050 hectáreas en 1990- alcanzó las 209.550 hectáreas un quinquenio después, casi duplicándose con respecto a los guarismos registrados veinte años atrás; paralelamente, la producción creció un 67,9% -pasó de 160.761 a 269.970 tn (SAGPyA, 2007a)-, afianzando así al país como primer productor mundial (50%).

No tardó en eclosionar la crisis frente a la convergencia de múltiples factores, como la entrada en plena producción de las nuevas plantaciones nacidas a partir de la 'desregulación', el declive del escurrimiento de materia prima canchada hacia Brasil -el cual llegó a su tope en 1997- y el aumento de los rindes correntinos y misioneros, los cuales en conjunto redundaron en el acelerado desplome de la rentabilidad del sector, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas explotaciones: según Gortari (2008), el precio pagado por kilogramo de hoja verde cayó en picada entre 1991 y 2001, pasando de \$0,20 a \$0,02, nivel irrisorio, situado por debajo del valor de una simple goma de mascar. No es extraño, pues, que con posterioridad se hayan suscitado la tala rasa de los yerbales, la sustitución de éstos por cultivos anuales o, sobre todo, plantaciones de pino, la enajenación de las desvalorizadas chacras a las grandes compañías forestales extranjeras y, por consiguiente, la agudización del éxodo rural; en 2002, la superficie dedicada al cultivo de yerba-mate se había reducido a 187.400 hectáreas, contrayéndose, con respecto a su pico histórico (1995), un 8,8% para Misiones y un 25,8% para el nordeste correntino. Son los vectores del acontecer jerárquico, alentando la sistemática y violenta racionalización de esa función agrícola local.

Ensayada por algunas grandes empresas articuladas a la molienda y la comercialización, la integración vertical de la producción acentuó la lógica de la concentración de la propiedad - los yerbales misioneros de mayor envergadura (hasta 500 hectáreas) pasaron a representar más de la mitad del área provincial (INDEC, 2005)- y la producción, reforzando las desigualdades preexistentes: por un lado, los grandes productores conseguían lucrar a expensas de los más pequeños, toda vez que su rentabilidad era, en ese marco, 30 veces mayor a la de estos últimos -el ingreso anual de un productor de 100 hectáreas ascendía a \$108.000, contra los

\$8.100 de un chacarero de 10 hectáreas y los \$3.600 de un minifundista de 5 hectáreas-; por otro lado, la participación global de los productores en la renta yerbatera cayó del 30% al 3%, pues con cada disminución en 10 centavos suscitada en el precio pagado por kilogramo de hoja verde, los molinos e hipermercados ganaban 90 millones de pesos anuales (Gortari, 2008). Se configuraba así una cadena soterrada de dominación o subordinación, de la cual los patrones de consumo desplegados por los intermediarios que controlan los canales minoristas de comercialización, las estrategias de molinos y secaderos -que imponen condiciones específicas de producción- y las asimetrías reproducidas por las grandes plantaciones se revelaban como eslabones externamente forjados que impactaban de lleno sobre los agentes más débiles. Se asistió, asimismo, a una notoria contracción en el segmento agroindustrial: la crisis yerbatera, al eliminar a 140 de los 200 molinos y secaderos preexistentes, afianzó la hegemonía de apenas doce empresas, las cuales pasaron a acaparar el 90% del mercado; sólo las cinco más grandes satisfacían la mitad de la demanda (AACREA, 2004d). Negando la fábula de la 'desregulación', las nuevas solidaridades organizacionales impuestas por los macroactores del sector permitieron a éstos ejercer un más férreo comando sobre el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, dicha crisis no impidió la persistencia de esa especialización productiva, especialmente en Misiones, donde involucra al 60% de las explotaciones y al 28,6% de la superficie agrícola provincial (INDEC, 2005). Y es que, a pesar de su aparente irracionalidad, esa función recientemente ha ganado nuevos dinamismos, amalgamando las lógicas del pasado y los imperativos del presente. En esa provincia aún imperan el minifundio y la agricultura familiar como formas dominantes de producción, toda vez que las explotaciones inferiores a las 10 hectáreas representan al 81,7% de los agentes y al 48,7% del área (INDEC, 2005), revelándose, por consiguiente, como rasgos arquetípicos de una función en gran medida todavía gobernada por pautas heredadas de épocas pretéritas. Otras circunstancias, en cambio, fuerzan a la actividad

a incorporar con brío los contenidos del período actual; sobresale entre ellas la vocación de marcada extroversión adquirida por una función agrícola tradicionalmente orientada al consumo interno: si las exportaciones de yerba-mate se triplicaron entre 1989 y 1998, en 2005 representaban el 13,1% de las cosechas (INYM, 2007a). No es extraño que, ante la ausencia de una acción burocrática eficaz que amortigüe el impacto de las crisis de sobreproducción, los mercados internacionales -Siria, Brasil, Uruguay y, en menor grado, Chile, Bolivia, Paraguay y Líbano- despusen como una regulación externa a los espacios agrícolas; así pues, los cupos de siembra quedan, en cierto modo, a criterio de la 'mano invisible del mercado', que absorbe los excedentes de un consumo doméstico relativamente constante.

Quizás es por eso que la flamante creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se revela, tal vez, como un dato que refleja la inadecuación de la acción pública a las demandas de racionalidad de la modernidad actual; orientado a eliminar las crisis de sobreproducción y fijar los precios de la materia prima comercializada en los secaderos, ese segmento del Estado nacional pretende regular, sin éxito, los intersticios de una división territorial del trabajo comandada por grandes industrias, cadenas concentradas de distribución interna y grupos económicos vinculados a la exportación. El INYM -que funciona desde inicios de este milenio bajo un marco normativo similar al de la antigua CRYM, pero despojado de su correspondiente mercado consignatario- impone un precio 'político' de referencia para la hoja verde y la yerba canchada situado en el 10-12% del valor del producto final. Y aunque el precio pagado por la producción primaria haya crecido exponencialmente en los últimos años -entre 2002 y 2007 pasó de \$0,04 y así los chacareros lograron nuevamente apropiarse del 30% de la renta-, esa acción compensadora no consigue suprimir los excedentes de producción que, en solidaridad con mecanismos elusivos del control estatal, como la comercialización informal, el pago a plazos de hasta 180 días y la descalificación de la materia prima en fábrica, comprometen aún más la ya de por sí erosionada rentabilidad de los minifundios

(Gortari, 2008). Al ser incompleta, esa métrica burocrática acaba volviéndose ineficaz.

Otro rasgo propio del más reciente episodio de racionalización de la actividad yerbatera apunta a la sostenida obtención de cosechas crecientes en una arena menor de producción, sin verse en modo alguno influida por los vaivenes verificados en el área implantada; de hecho, la superficie sembrada con yerba-mate ha crecido un 10,6% entre 1990 y 2005, más el volumen cosechado se expandió un 386,9%, de ahí que los rindes por unidad de superficie crecieran, en ese lapso, un 203,5% en Misiones y un 291,6% en Corrientes (SAGPyA, 2007a). Son los resultados de la respuesta ensayada ante las exigencias externas de aumento del volumen y la calidad de la producción, que obligaron a la adopción de ciertas innovaciones técnicas; la inoculación de hormonas -ácido abscísico-, la implementación de programas de mejoramiento genético y el patentamiento de variedades de alto rendimiento resistentes a heladas, insolación y sequías² a partir de una clonación *in vitro* basada en la importación de biorreactores franceses (MISIONES, 2002) despuntan como vectores de cientifización de una agricultura que, renovada a partir de un moderno proceso de crono-expansión de la frontera agropecuaria, permiten a los espacios de la yerba-mate ganar nuevas jerarquías en el mapa global de producciones.

No obstante, y como contracara de esa modernización y de la superación del momento más álgido de la crisis yerbatera, la exclusión social directamente asociada a la actividad, en vez de revertirse, se ha consolidado y exacerbado; dada la impotencia estatal para regular eficazmente el sector yerbatero, la situación social de los llamados peones 'tareros' se deteriora en vez de mejorar: año tras año, veinte mil trabajadores estacionales surcan la Selva Misionera para desplazarse hacia los yerbales y allí desarrollar tareas de control de malezas, fertilización y cosecha. Sin embargo, los métodos de recolección sistematizada y mecanizada, predominantes, sobre todo, en las grandes plantaciones, han reducido sustancialmente ese número, expulsando a

abundante fuerza laboral del proceso productivo; paralelamente, el mercado de trabajo regional es fragmentado, por un lado, por las estrategias desplegadas por molinos y secaderos -que incluyen múltiples mecanismos de precarización de las condiciones de trabajo, así como también la reducción de las remuneraciones a guarismos que apenas si garantizan la más elemental de las subsistencias- y, por otro lado, por el auge cobrado por la terciarización, que forja un nuevo eslabón en la cadena de explotación -los secaderos, al desembarazarse de un gran número de capataces, los obligaron a convertirse en contratistas rurales, que reclutan fuerza laboral para ellos-. Se asiste, pues, a un proceso de racionalización de los espacios locales de la agricultura que combina datos de este período y la reproducción de inercias de épocas pretéritas.

Beneficiado por la crisis yerbatera, el sector forestal pasó del ostracismo a la bonanza. Ni la agricultura forestal ni la industria a ella asociada constituyen, en verdad, funciones recientes en Misiones y Corrientes; por el contrario, su origen se remonta a la época colonial, cuando las misiones jesuíticas fomentaron la constitución de los primeros obrajes forestales. No obstante, el desenvolvimiento de la agricultura forestal permaneció relativamente estático hasta mediados del Siglo XX; desde entonces, el imperio de una racionalidad desarrollista -fundada tanto en los créditos fiscales para implantación arbórea e introducción de especies exóticas otorgados por el Instituto Nacional Forestal (IFONA) cuanto en la fundación de industrias celulósico-papeleras controladas por el Estado nacional-, inaugurando una fase de prosperidad para la actividad que recién concluyó en los años ochenta, cuando la crisis económica generalizada puso fin a los subsidios para forestación, permitiendo que el mercado argentino de aserrado fuera inundado con madera de pino importada de Brasil y Chile: y mientras vastas superficies eran abandonadas o experimentaban una brusca reconversión agrícola-ganadera, firmas europeas se adueñaban del ya diezmado bosque nativo.

No se trataría de una irracionalidad duradera. Solidaridades entabladas entre la disolución del IFONA y la enajenación de los

² En 1997, el INTA Cerro Azul patentó la primera variedad registrada a escala mundial de yerba mate (CA 8/74), que permite rendimientos por unidad de superficie de hasta 18.000 kg/ha (INYM, 2007a).

principales complejos celulósicos estatales volvieron al territorio argentino funcional a las estrategias de acumulación de la industria forestal globalizada: la necesidad trasandina de hallar nuevas fuentes de materia prima, las rigurosas legislaciones ambientales escandinavas, norteamericanas y españolas, y los graves episodios de contaminación suscitados en Canadá, Chile y Finlandia ocasionaron la migración masiva, durante la década de 1990, de parte de la industria celulósica internacional hacia Argentina y Uruguay; paralelamente, la vasta disponibilidad de tierras fiscales a bajo precio, el magro costo de reproducción de la fuerza de trabajo, los laxos controles ambientales argentinos y el acelerado crecimiento de los árboles -medido en metros cúbicos por hectárea, es el más rápido del mundo, con turnos de corte extremadamente bajos (12-16 años para el pino y 6-7 años para el eucalipto, contra los 60 e incluso 120 años de Finlandia-, acabaron consagrando al nordeste correntino y gran parte de Misiones como los mejores sitios del planeta para la instalación de forestaciones exóticas y plantas de celulosa, sólo igualados por Bahía y Rio Grande do Sul.

Signado por la masiva llegada de firmas extranjeras, un sistemático proceso de racionalización fue inaugurado por las siderales inversiones en el complejo silvícola-industrial argentino: Chile daba cuenta del 46% de los 3.500 millones de dólares recibidos entre 1990 y 2000 por el sector, secundado por Estados Unidos (31%) y Canadá (15%) (ARGENTINA, 2006a). Sólo tres países consiguieron adueñarse, pues, no sólo de inmensas superficies destinadas a la implantación de pinos y eucaliptos, sino también de algunos complejos celulósicos e incontables aserraderos, fábricas de cartón corrugado y plantas de compensado y laminado. Otrora estatal, la planta productora de celulosa Papel Misionero fue vendida a mediados de los años noventa a grupos económicos nacionales, en tanto que las industrias de Puerto Piray y Alto Paraná cayeron en manos del grupo trasandino Arauco y Constitución; innumerables hectáreas fueron adquiridas por el consorcio estadounidense-argentino Tapebicué y por algunas compañías chilenas como CMPC-Minico y Masisa, en tanto que la planta de compensados de eucalipto más grande del

mundo fue absorbida por la corporación neocelandesa Flether Challenger. Si hasta algunas empresas transnacionales ligadas al sector petrolero, como Royal Dutch Shell, y granario, como Louis Dreyfus, se dieron cita en Misiones y Corrientes para sumarse al auge de una agricultura forestal basada en plantaciones exóticas. Obnubilados por el sagrado paradigma de la competitividad, los gobiernos provinciales no dudaron en subsidiar con recursos públicos la permanencia de esas industrias e, incluso, la implantación de nuevas fábricas.

Silveira (1999) explica que las funciones de la división internacional y territorial del trabajo no se instalan ignorando las características jurídicas de los lugares, sino más bien por su intermedio; y así, la reforma de los regímenes fiscales, laborales y de seguridad social de la industria forestal, la implementación del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales (RPPF) y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), y la sanción de la 'Ley Nacional de Bosques Cultivados' (25.080), vigente desde 1998, exacerbaron la avidez del capital. Nutrido, el acervo de ventajas fiscales -'congelamiento' de tasas, exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y del Impuesto Inmobiliario al doble de la superficie forestada, amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado- y comerciales -desgravación arancelaria a las importaciones- desplegado sintetiza las garantías jurídicas con las que el Estado nacional benefició a esas firmas por un lapso de 33 años; paralelamente, y vía la adjudicación de millonarios subsidios destinados a alentar la implantación de especies exóticas de rápido crecimiento y gran valor económico, los sistemas de acciones públicas asumieron como propios los costos privados de implantación y explotación, incluida la tala del bosque nativo: el Estado nacional desembolsó, en el marco del RPPF, más de 141 millones de dólares, de los cuales el 77% fue absorbido por Misiones y Corrientes (PFM, 2003), que así lograron triplicar sus superficies implantadas.

Ante las favorables condiciones generadas por distintos segmentos del Estado, las plantaciones exóticas, que antaño sólo proveían el 10% de la madera aserrada utilizada por la industria forestal, elevaron tal participación

relativa al 90%, aunque representando apenas el 4% del área boscosa total. Sede del 78,7% del área forestada con recursos públicos, Misiones y Corrientes incrementaron, entre 1992 y 1999, un 293,6% y un 678,9% la extensión implantada con especies foráneas, respectivamente (PMF, 2003), apoderándose de más de la mitad (64,1%) de la superficie forestal nacional (1.022.686,2 has); al mismo tiempo, la importancia 'regional' de la actividad se acrecentó notablemente, pues pasó a absorber el 48,6% y el 60,3% del área misionera y correntina bajo cultivo (INDEC, 2005). Los nuevos usos agro-forestales del territorio, al fomentar la homogeneización formal y funcional de los lugares, introdujeron un contenido vertical; insertas en el marco de esa nueva división territorial del trabajo, esas provincias forjaron una mono-funcionalidad o especialización extrema. En Misiones, las coníferas aumentaron entre 1994 y 2003 un 60,6% su área, pasando de 177.300 a 284.834 hectáreas y absorbiendo así el 97,9% de los montes provinciales; paralelamente, el pino representaba el 76,6% de la superficie forestada provincial, de la cual más de la mitad se concentra en Iguazú, Eldorado, San Martín y San Ignacio (ARGENTINA, 2007; SAGPyA, 2005; INDEC, 2005). El eucalipto, que algunos años atrás se había afianzado en los bosques implantados del nordeste correntino, fue desplazado por el pino, debiendo reubicarse en otras áreas; de ahí que las coníferas representaran el 70,7% de la superficie forestada provincial (INDEC, 2005). De hecho, el área correntina forestada con pinos aumentó un 70,6% entre 1996 y 2002 -pasó de 117.371 a 200.207 hectáreas-, pero la superficie cultivada con eucaliptos hizo lo propio en sólo un 11,5% -pasó de 70.596 a 78.721 hectáreas-. Si ambas especies explican la mayoría de la producción nacional (81%), misionera (96%) y correntina (100%) de rollizos, esas jurisdicciones concentran a su vez el 93,7% de la madera de pino (SAGPyA, 2005; ARGENTINA, 2007).

Siempre procurando conquistar vastas superficies para los géneros forestales exóticos, los agentes hegemónicos subordinaron a las economías campesinas de subsistencia y los pequeños y medianos productores agrícolas; las crisis de sobreproducción del tabaco y la yerba-

mate fueron funcionales al imperio de esa racionalidad: el quebranto de numerosas explotaciones agrícolas y la reducción del valor de las chacras permitieron a las compañías forestales apoderarse a precios irrisorios de inmensas áreas, arrasar con viviendas y escuelas, expulsar a numerosas familias de colonos y minifundistas, y azuzar el éxodo rural. No obstante, esa racionalización se concretó principalmente a raíz de la destrucción de la floresta autóctona y la pérdida de biodiversidad. Si en el centro y sur correntino la agricultura forestal se desarrolló a partir de la reconversión de bañados y pastizales, en el nordeste provincial y Misiones lo hizo a expensas de la Selva Paranaense; así pues, esa última provincia perdió 241.012 hectáreas de bosque nativo en 1998 y 2002, esto es, el 16,6% (MISIONES, 2005). Según fuentes oficiales, la tasa anual de desmonte (1,3%) de Misiones es 5,8 veces superior a la media mundial (SAyDS, 2007). Evidente es la relación entre tala y monocultivo forestal: el 23,7% de las tierras que, a inicios del Siglo XXI, se hallaban cultivadas con especies forestales foráneas, fue obtenido a partir de la destrucción del bosque vernáculo; el 57,0% de las 67.233 hectáreas segadas entre 1998 y 2002 (SAyDS, 2005) fue absorbido por el crecimiento de las plantaciones de coníferas y eucaliptos, permitiendo que el área sembrada con dichas especies aumentara un 46,4% (MISIONES, 2005; PMF, 2003). La codicia de Arauco por las tierras misioneras no conoce límites: desmontadas mediante tractores, cadenas y fuego, esas tierras son aradas y sometidas a la sistemática aplicación de elevadas dosis de agro-tóxicos; la tala, que se extiende hasta los márgenes de ríos y arroyos -contaminando sus aguas con agroquímicos y coadyuvando al secado de su cauce-, desaloja de sus tierras ancestrales a la etnia guaraní, despojándola de recursos para su subsistencia, y expulsándola hacia poblados y ciudades cercanos.

Nadie ignora que gran parte de esa destrucción de la Selva Misionera se realiza al amparo del Protocolo de Kyoto y del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del mercado de bonos de carbono, en virtud del cual países y empresas deben pagar a quienes desarrollan proyectos que fijan dióxido de carbono y liberan oxígeno; las potencias

industrializadas, al ser conminadas a disminuir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, adquieren bonos de carbono a las naciones en las cuales se desarrollan proyectos que supuestamente amortiguarían el cambio climático global, como la creación de 'sumideros' a partir de la forestación y la reforestación: tal suerte de 'certificados de oxígeno' obliga a los lugares a someterse al imperio de una novedosa lógica financiera que los insta a participar del frenesí especulativo de los mercados internacionales de capitales. Evidentes son las solidaridades tejidas entre este sistema de eventos y la lógica del monocultivo, dado que, como bien señalan Sánchez Acosta y Vera (2005), las especies exóticas son las únicas aceptadas para el desenvolvimiento de la comercialización certificada de bonos de carbono; así pues, el Protocolo de Kyoto y el MDL, en vez de atenuar el proceso de calentamiento climático, lo exacerbaban, pues una vez transcurridos treinta años después de su implantación inicial, las forestaciones desarrolladas al amparo de esas normas externas pueden ser destinadas a cualquier uso, incluida la explotación maderera, convirtiendo a los actuales 'sumideros de carbono' en futuros y harto probables escenarios de devastación.

Surgen, a raíz del imperio del monocultivo, los llamados 'desiertos verdes' o 'bosques silenciosos', sistemas de objetos portadores de una lógica que, extraña a los lugares, denotan lo que Simondon (1958) llama hipertelia, esto es, un exceso de especialización. Nada vive y crece en esas áreas, excepto las plantaciones de pino y eucalipto dispuestas en hileras separadas por distancias rigurosamente calculadas y constituidas por ejemplares dotados de una misma forma, edad y genética; sometida al imperio de una racionalidad instrumental, una naturaleza signada por la casi absoluta ausencia de fauna y flora es esterilizada de toda forma de existencia no hegemónica, demostrando que el monocultivo no es otra cosa que la antítesis de la biodiversidad. Nefasto es el impacto que esa homogeneización de las formas y funciones del espacio regional posee; con la disminución de la cobertura vegetal y el excesivo consumo hídrico característico de las coníferas, el colapso del régimen subterráneo se torna inexorable: las fuentes de agua desaparecen rápidamente y las

plagas proliferan; como las tierras ganadas al bosque nativo se vuelven más ácidas y susceptibles a la erosión y a la pérdida de fertilidad, los suelos quedan absolutamente yermos y estériles; paralelamente, en Misiones el pino se ha convertido en una especie ecológicamente invasora (Carrere, 2005), de ahí que sean harto comunes entre las poblaciones locales las enfermedades y alergias respiratorias suscitadas por las enormes cantidades de polen derivadas del florecimiento arbóreo simultáneo. Y a esto debe añadirse el impacto generado por los complejos celulósicos, que ocasionan la polución del aire y el agua, así como también la mortandad masiva de flora y fauna, incontables pérdidas económicas a otros sectores y, según Carrere (2005), innumerables problemas de salud -enfermedades respiratorias, alergias, diversos tipos de cáncer, abortos espontáneos, nacimientos con malformaciones- en poblados como Wanda, Puerto Piray y Puerto Esperanza.

Ni siquiera es posible justificar ese agresivo proceso de racionalización del espacio local a partir de argumentos basados en el desarrollo productivo y social regional. Si bien en Misiones la estructura de la propiedad de las plantaciones se encuentra relativamente atomizada, ello no impide que el nivel de concentración de la tierra sea abrumador: la superficie promedio de las grandes explotaciones forestales rebasa, en esa provincia y en el nordeste correntino, las 2.000 hectáreas; el 83,8% de las extensiones forestadas se halla en manos del capital extranjero, especialmente chileno (66,1%); de hecho, las 230.000 hectáreas explotadas por el conglomerado trasandino Arauco, que representan el 45,1% del área cultivada, hacen de esa empresa dueña del 8% de la superficie misionera (PMF, 2003). Son las plantas de celulosa de Arauco las que, al ensayar estrategias de integración vertical, permiten a dicha firma controlar también los principales aserraderos provinciales y regular en condiciones prácticamente monopólicas el mercado de madera en bruto; por añadidura, innovaciones técnicas y organizacionales como semillas genéticamente modificadas de alto rendimiento, programas de control y erradicación de plagas y métodos de incremento de la calidad de la producción son todavía un privilegio de las grandes plantaciones

(Maslatón, 2005), permaneciendo vedadas al resto de las explotaciones, donde predominan montes de baja calidad genética.

Misiones y Corrientes revelan una marcada dependencia de la actividad forestal y la industria a ella asociada -explican la mitad del PBG y el 42% del empleo 'regional'-, la presencia de las grandes compañías le imprime un renovado dinamismo demográfico a localidades que hallan en la actividad la reproducción de las condiciones de existencia de gran parte de su población, y las empresas proporcionan viviendas a su fuerza laboral vía la construcción de barrios especiales. Sin embargo, ese acervo de datos empíricos propio de un acontecer complementario oculta otras realidades, así como también el despliegue de dispositivos y formas de dominación más sutiles: las tres fábricas misioneras de celulosa generan menos de un millar de empleos; mil hectáreas forestadas equivalen a sólo cuatro puestos de trabajo; superior al 70%, el nivel de informalidad de la actividad forestal deviene campo fértil para el despliegue de condiciones de explotación laboral extremadamente precarias, entre las que sobresalen mecanismos como la externalización -terciarización, subcontratación-, el pago a destajo, las ínfimas remuneraciones y el trabajo infantil (Carrere, 2005), en un sector que es el segundo de la economía argentina en cuanto a recurrencia de accidentes laborales fatales y / o generadores de discapacidades permanentes (ARGENTINA, 2006b). Como gran parte de la población misionera depende de la actividad forestal, las reivindicaciones tanto laborales cuanto ambientales, son fácilmente sofocadas y desarticuladas por las empresas y el poder político provincial, so pena de pasar a engrosar los ya de por sí abultados bolsones urbanos de pobreza. Sabido es, finalmente, que los trabajadores de las compañías forestales jamás logran acceder a la propiedad de las viviendas que habitan; su permanencia en ellas está sujeta a la respectiva continuidad laboral -la pérdida del puesto de trabajo implica automáticamente la pérdida de la vivienda-, de ahí que las voces díscolas o rebeldes al modelo hegemónico sean rápidamente acalladas. Son éstas las consecuencias de una función propia del medio

técnico, que en pocos años pasó de la irracionalidad a la racionalización.

5. CONCLUSIONES

El campo argentino, al igual que el espacio geográfico todo, es compartimentado e incluso fragmentado -en términos territoriales, productivos y sociales- según sus distintos niveles de racionalidad. No queda duda alguna de que, en nuestro país, la manifestación más pura y significativa del reciente proceso de racionalización del medio rural es encarnada por la estructuración del cultivo de soja transgénica como función hegemónica por excelencia en derredor de la cual se articula y reproduce todo el campo argentino, y que se halla íntimamente asociada a la difusión del paradigma de una agricultura globalizada y cientifizada basada en la crono-expansión de la frontera agropecuaria: ésa es la racionalidad dominante en estado puro, sin matices. Obstando su vocación por conquistarlo todo, dicha lógica es obligada a coexistir con otras racionalidades; esto demuestra que, pese a todo, algunas regiones del territorio argentino todavía continúan definiéndose y diferenciándose en virtud de la estabilidad de sus respectivas prácticas agrícolas, y que el grado de permeabilidad de producciones y lugares al impacto de los vectores externos que perturban su desarrollo y a la incorporación de los modernos datos que propone el actual medio técnico-científico-informacional es siempre diverso y desigual.

Se vuelve patente entonces que, a raíz de ese proceso de renovación del espacio, algunas funciones regionales -el algodón, el azúcar y los limones, la yerba-mate y las forestaciones exóticas- históricamente consideradas como hitos o emblemas del sector agropecuario de determinadas áreas del país -Chaco, Tucumán, Misiones, el nordeste correntino-, muestran situaciones internas y externas de diferenciación nacidas del dilema o tensión originados por la voluntad de mantenerse fiel al pasado y la necesidad de sobrevivir a los embates de la modernidad contemporánea. No obstante, todas ellas comparten cierta impotencia y / o resistencia en cuanto a la adopción de los contenidos técnicos, científicos e informacionales de la agricultura globalizada-.

Surge, pues, una tipología de actividades. Algunas funciones expresan rupturas a partir de las cuales los espacios derivados comienzan a tornarse agotados y repulsivos, perdiendo productividad en virtud del estrangulamiento de la demanda doméstica, el cierre de los mercados externos y las contingencias climáticas: tal es el caso del algodón chaqueño, empujado hasta el borde mismo de la desaparición, en abierta contraposición respecto de la próspera situación de ese mismo cultivo en el noroeste argentino; se trata de una crisis socio-productiva desencadenada por el imperio del modelo sojero, la inviabilidad de estructuras productivas pretéritas, la concentración de tierras y producción, y la desaparición de agentes tradicionales.

Otras actividades, al metamorfosearse en sede de un delicado contrapunto entre verticalidades y horizontalidades, y en campo de batalla entre el pasado y el futuro, continúan reproduciéndose con relativa regularidad, aunque no exentas de crisis bruscas y a veces violentas. La yerba-mate sigue desenvolviéndose con relativo éxito a pesar de la 'desregulación'; con sus fincas tecnificadas y sus notorios niveles de integración vertical, el limón tucumano se revela mucho más dinámico, compartiendo con la ya citada función dos rasgos preponderantes: el liderazgo mundial y la fuerte incorporación de biotecnología al proceso productivo. La caña de azúcar, por su parte, muestra la urdimbre de un complejo tapiz de relaciones tejido a nivel local-regional con la citricultura, el cual le permite sustraerse parcialmente a los avatares de los precios internacionales y las crisis de sobreproducción, gracias a las solidaridades tejidas con el capital financiero, la eclosión de nuevos nichos en la demanda internacional y la tecnificación del trabajo agrícola necesaria para satisfacerla; a pesar de su elevado o creciente -según el caso- nivel de extraversión, todas las actividades hasta aquí mencionadas permanecen más o menos atadas al mercado interno, que continúa pautando su desenvolvimiento en un escenario cada vez más concentrado desde el punto de vista económico y cada vez menos inclusivo desde el punto de vista social y laboral.

Y, finalmente, la silvicultura propia de la Selva Misionera parece detentar una jerarquía

superior en el conjunto global, configurándose quizás como la más racional, merced a una elevada productividad espacial fundada en una densidad normativa favorable al capital extranjero, una inmejorable aptitud productiva local y una agresiva crono-expansión de la frontera agropecuaria.

Irracional por definición en lo que específicamente concierne a la difusión pura u ortodoxa de la lógica hegemónica, todo este variado mosaico de producciones y lugares testimonia la existencia de otras formas de racionalización que, propias de la actual fase de modernización del espacio nacional, igualmente acaban basándose en el predominio una naturaleza artificializada, empeñada en imitar, cuando no en superar, a la naturaleza natural.

REFERENCIAS

AACREA. Algodón. *Agroalimentos argentinos*, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2004a.

AACREA. Caña de azúcar. *Agroalimentos argentinos*, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2004b.

AACREA. Citricultura. *Agroalimentos argentinos*, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2004c.

AACREA. Yerba mate. *Agroalimentos argentinos*, Buenos Aires, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2004d.

ARGENTINA. *Las 10 mejores razones para invertir en la Industria Forestal Argentina*. 1. ed. Buenos Aires: Agencia Nacional de Inversiones-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, 2006a, 15p.

ARGENTINA. *Accidentabilidad 2004 y evolución 2000-2004*. 1. ed. Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2006b, 5p.

- ARGENTINA. *Serie: estadísticas forestales (1993-2006)*. 2. ed. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007, 177p.
- CALVO, CLARA. El espacio azucarero de la Provincia de Tucumán frente al proceso de globalización. *II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix* (CD Rom), Tandil: UNCPBA, 2008, 25p.
- CARRERE, RICARDO. La selva convertida en pinos para celulosa. *Eco-Portal.net*. Buenos Aires: <http://www.ecoport.net/>, 2005.
- CONABIA. *OVGM liberados al medio (1991-2004)*. 3. ed. Buenos Aires: Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, 2006, 33p.
- DOMÍNGUEZ, D; SABATINO, P. Con la soja al cuello: la transgénesis de un modelo. *III Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales* (CD Rom). Buenos Aires: UBA, 2003, 17p.
- EXPORT.AR. *Análisis de la tendencia del mercado internacional de frutas cítricas*, n. 12. Buenos Aires: Fundación EXPORT.AR-Subsecretaría de Comercio Internacional, 2005, 36p.
- FEDERCITRUS. *La citricultura en números. Estadísticas cítricas 1995-2005*. Tucumán: Federación de Productores Argentinos de Citrus, 2006, 112p.
- FRIEDMANN, HARRIET. The political economy of food: a global crisis. *New Left Review*, n. 197, p. 45-62, 1993.
- GARCÍA, A; GARCÍA, I; RODRÍGUEZ, E; ROFMAN, A. Los dos "campos" argentinos. Estudio de las relaciones asimétricas y diseño de estrategias para el desarrollo rural. *II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix* (CD Rom). Tandil: UNCPBA, 2008, 28p.
- GHEZÁN, G; MATEOS, M; ELVERDÍN, J. *Impacto de las políticas de ajuste estructural en el sector agropecuario y agroindustrial: el caso de Argentina*. Santiago de Chile: CEPAL, 2001, 38p.
- GÓMEZ LENDE, SEBASTIÁN. Orden global, ¿orden irracional? Agricultura de exportación, devastación de bosques nativos y crisis socio-ambiental en Argentina. *Ensayos e Investigaciones Geográficas*, n. 7, a. VII, p. 37-52, 2008.
- GORTARI, JAVIER. El INYM en el banquillo: interpelación social a las medias tintas de la regulación 'posmoderna' como política pública para la actividad yerbatera. *II Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales-IX Encuentro de la Red de Economías Regionales en el marco del Plan Fénix* (CD Rom). Tandil: UNCPBA, 2008, 18p.
- HEIDEGGER, MARTIN. *An introduction to metaphysics*. 5. ed. New Haven: Yale University Press 1959, 302p.
- INDEC. *Censo Nacional Agropecuario 2002. Resultados definitivos por provincias y departamentos*. 1. ed. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2005: 1550p.
- INYM. *Estadísticas yerbateras*. 1. ed. Buenos Aires: Instituto Nacional de la Yerba Mate, 2007a, 18p.
- INYM. *Informe de coyuntura mensual*. Buenos Aires: Instituto Nacional de la Yerba Mate, 2007b, 7p.
- KOSIC, KAREL. *Dialéctica de lo concreto*. 3. ed. Caracas: Grijalbo, 1967, 354p.
- MANZANAL, MABEL. Neoliberalismo y territorio en la Argentina de fin de siglo. *Economía, sociedad y territorio*, v. II, n. 7, pp. 433-458, 2000.
- MASLATÓN, CARLOS. *Potencial del complejo maderero argentino. Propuestas para el desarrollo de la cadena madera-muebles y su inserción en el mercado mundial*. Documento de trabajo n. 2. Buenos Aires: INTI, 2005, 64p.

- MAYO, ANÍBAL. Plan Cavallo y economías regionales: el mito de la 'salida exportadora'. *Realidad Económica*, n. 135, p. 10-34, 1995.
- MISIONES. *Relevamiento yerbatero*. 1. ed. Posadas: Gobierno de la Provincia de Misiones, 2002, 114p.
- MISIONES. *Primer compendio cuatrienal estadístico sobre el sector foresto-industrial de la provincia de Misiones (1999-2003)*. Posadas: Gobierno de la Provincia de Misiones, 2005, 116p.
- PENGUE, WALTER. Impactos tecnológicos y ambientales de la liberación de organismos genéticamente modificados (OGM's). *Comercio, ambiente y desarrollo sustentable: perspectivas de América Latina y el Caribe*. México, D. F.: PNUMA-UNMA-COMMEDES, 2004, 86p.
- PIERRI, JUAN. El boom de la soja. Un retorno al pasado. *Realidad Económica*, n. 219, p. 53-65, 2006.
- PMF. *Plan Maestro Forestal: bosques cultivados y foresto-industria*. Posadas: Gobierno de la Provincia de Misiones, 2003, 84p.
- ROCA, PIERRE-JEAN. 1989): Les géographes tropicalistes et la technique. In: BRUNEAU, M; DORY, D. *Les Enjeux de la Tropicalité*. París: Masson, 1989, p. 119-127.
- ROCA, CECILIA. *Impacto económico de la soja y el algodón transgénicos en Argentina*. Buenos Aires: Asociación de Semilleros Argentinos-INTA, 2003, 5p.
- ROFMAN, ALEJANDRO. *Desarrollo regional y exclusión social*. Transformaciones y crisis en la Argentina contemporánea. Buenos Aires: Amorrortu, 2000, 405p.
- ROFMAN, A; BUSSO, G; GUTMAN, V; VON STORCH, M. V. Conclusiones. *Segundo Encuentro de Universidades Nacionales sobre Economías Regionales: Plan Fénix, propuesta para el desarrollo con equidad*. Río Cuarto: UNRC, 2003, 11p.
- SAGPyA. *Estadísticas forestales (1998-2004)*. 1. ed. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2005, 54p.
- SAGPyA. *Estadísticas agrícolas 1970-2006 (cereales, oleaginosas, industriales y frutícolas)*. Superficie sembrada, cosechada, producción y rendimientos. 5. ed. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires, 2007a, 333p.
- SAGPyA. *Exportaciones de azúcar al mercado mundial durante el año 2006-exportaciones por cuota americana 2006-2007*. 2. ed. Buenos Aires: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 2007b, 42p.
- SAYDS. *Primer inventario nacional de bosques nativos (1998-2001)*. 1. ed. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2005, 202p.
- SAYDS. *Segundo inventario nacional de bosques nativos*. 1. ed. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2007, 188p.
- SÁNCHEZ ACOSTA, M; VERA, L. Situación foresto-industrial de la Argentina al 2005. *III Simposio Ibero-Americano de Gestión y Economía Forestal*. São Paulo: Ubatuba, 2005, 24p.
- SANTOS, MILTON. *Espaço e método*. 3.ed. São Paulo: Nobel, 1992, 98p.
- SANTOS, MILTON. *A natureza do espaço*. Técnica e tempo, razão e emoção. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1996a, 260p.
- SANTOS, MILTON. *De la totalidad al lugar*. Barcelona: Oikos-Tau, 1996b, 187p.
- SANTOS, MILTON. *Por uma outra globalização*. Do pensamento único à consciência universal. 1. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2000, 174p.

- SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. *O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI*. 1. ed. Rio de Janeiro-São Paulo: Record, 2001, 472p.
- SARTRE, JEAN-PAUL. *El ser y la nada*. Ensayo de ontología fenomenológica. 5. ed. Buenos Aires: Losada, 1968, 354p.
- SILVEIRA, MARÍA LAURA. *Um país, uma região*. Fim de século e modernidades na Argentina. 1. ed. São Paulo: FAPESP, LABOPLAN-USP, 1999, 487p.
- SILVEIRA, MARÍA LAURA. Por una epistemología geográfica. In: BERTONCELLO, RODOLFO; ALESSANDRI CARLOS, ANA FANI. *Procesos territoriales en Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Buenos Aires, 2003a, p. 13-26.
- SILVEIRA, MARÍA LAURA. *Argentina: território y globalização*. 1. ed. São Paulo: Brasiliensi, 2003b, 95p.
- SILVEIRA, MARÍA LAURA. Globalización y circuitos de la economía urbana en ciudades brasileñas. *Cuadernos del CENDES*, v. 21, n. 57, p. 1-21, 2004.
- SIMONDON, GILBERT. *Du mode d' existence des objets techniques*. 4. ed. París: Aubier, 1958, 452p.
- TADEO, N; PALACIOS, P; FEDELE, M; ATADEMMO, S; TORRES, F. El Complejo Agroindustrial Citrícola del Nordeste Argentino. Dificultades e incertidumbre en un escenario conflictivo. *III Encuentro Internacional Humboldt* (CD Rom). Salta, 2001, 26p.
- TEUBAL, MIGUEL. Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino. *Realidad Económica*, n. 196, p. 52-74, 2003.
- TEUBAL, MIGUEL. La expansión del modelo sojero en Argentina. De la producción de alimentos a los commodities. *Realidad Económica*, n. 220, p. 71-96, 2006.
- VALENZUELA, CRISTINA. Escalas de impacto diferencial de la dinámica del sector agrícola argentino en el Chaco (1998-2004). *Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía*, a V, n. 5, p. 191-221, 2004.
- VALENZUELA, CRISTINA. Procesos de agudización de desequilibrios territoriales. La consolidación de esquemas productivos duales en el sector agrícola del Chaco entre 1994 y 2004. *IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio* (CD Rom). Bahía Blanca: UNS, 2006, 35p.